



Confidencial

Campeche, en bancarrota

Con la novedad de que no es novedad: el gobierno de Campeche, que encabeza **Layda Sansores**, está prácticamente en bancarrota. Resulta que el gobierno morenista de esa entidad enfrenta falta de liquidez e incluso dificultades para cubrir servicios básicos, como el pago de luz, según lo ha reconocido la propia mandataria. La situación es tan crítica que Sansores ha dicho que, de no contar con recursos, podría suspender operaciones en oficinas estatales y que no pedirá prestado. A ver qué sucede en sus últimos meses.

El PT, con la canija duda ante llegada de Ariadna a Morena

Conforme avanza el tiempo y se acerca el proceso electoral, los aliados de Morena tienen menor temor de expresarse. **Geovanna Bañuelos**, vicecoordinadora del PT en el Senado, si bien saludó la inminente llegada de Ariadna Montiel como líder de Morena, resaltó que siempre “existe el riesgo” de que los padrones electorales, que ella estuvo manejando como secretaria del Bienestar, se usen con fines electorales en beneficio de cualquier partido. “Sería terrible, terrible institucionalizar el uso de los programas sociales”. Sin embargo, acotó que “sin duda” se le da el beneficio de la duda.

Arma Taddei su ‘club de Toby’ y provoca críticas

Consejeros del INE están molestos con la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, por armar su ‘club de Toby’ en el INE, pues aunque la paridad de género ha sido una bandera que ha defendido la institución, solo en una de 10 áreas clave que tuvieron cambios se nombró a una mujer. Con la nueva composición, en la cual el consejero **Martín Faz** acusó que la presidenta del INE dejó de lado el perfil técnico e impuso perfiles políticos, los hombres tendrán mayoría, evidenciando la incongruencia entre el discurso y las acciones.

La telaraña de Mier

Quien al parecer sí anda jugando a Pinocho es **Ignacio Mier**, coordinador de Morena en el Senado, pues en su defensa a Enrique Insunza, senador acusado en EU por presuntos vínculos con el narco, afirmó que sí se presentó y estuvo en el “informe de la senadora (Cynthia López)”, y que fue ahí donde le comentó del enredo en que estaba. Sin embargo, al menos en las fotografías y videos que se compartieron del informe, ni las luces del sinaloense.

Mañanera más breve

Cuarenta y tres minutos duró la denominada “mañanera del pueblo” de ayer. La más corta desde que **Claudia Sheinbaum** despacha en Palacio Nacional. La morenista no aceptó preguntas que no estuvieran relacionadas con el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, signado durante la conferencia. Es un hecho que el gobierno federal ya tenía conocimiento de que Estados Unidos había imputado formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por nexos con el narco, ya que el martes a las 18 horas la cancillería recibió solicitudes de extradición. La atención estaba en otra parte.

Relación México-EU, “con alfileres”

Justo cuando en San Lázaro acordaron crear una comisión que dará seguimiento al T-MEC, para los diputados de oposición el escándalo y la balconada al góber de Sinaloa, Rubén Rocha, dejaron “con alfileres” la relación México-EU. “Y cada segundo que Rocha Moya siga en su cargo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum pierde espacio de negociación”. “Cada segundo de impunidad daña la relación con ‘alfileres’ que se tiene en materia de seguridad”, remató el panista **Federico Döring**. ¿Y ahora quién quitará los alfileres?

TEMPLO MAYOR

F. BARTOLOMÉ



EL GOLPE es demoledor: la acusación del **Departamento de Justicia** en contra de **Rubén Rocha Moya** lo exhibe como un narcogobernador, el cual llegó al poder por medio de una alianza entre **“Los Chapitos”** y **Morena**. Así de contundente.

NO SE TRATA DE una de las bravatas habituales que vienen de **Washington**, sino de una denuncia formal presentada ante una **Corte de Nueva York** y avalada por un Gran Jurado y que incluye una solicitud oficial de extraditar al gobernador de Sinaloa. Además hay un detalle clave: EU cuenta con decenas de peces gordos del narco, empezando por los propios “Chapitos”, **Ovidio e Iván Archivaldo**, por lo que tienen todo un arsenal contra funcionarios mexicanos. Vamos por partes.

SER O NO SER. Para la presidenta **Claudia Sheinbaum**, darle validez a la acusación contra Rocha Moya es reconocer que la 4T tiene su propio **Genaro García Luna**. Y que aquellos que dijeron ser distintos, resultaron igualitos.

EL NARCOGOBIERNO. Si ya de por sí los cargos por narcotráfico son graves, no son menores los señalamientos de que Morena se unió a “Los Chapitos” en la **elección de Sinaloa en 2021**. Y ese apoyo, que en su momento denunció la oposición, fue correspondido con permitirle al crimen organizado actuar a sus anchas y hasta decidir sobre los cuerpos policiacos.

EL RASPÓN A AMLO. El tema de fondo es que el ex presidente AMLO quedó en la mira. Y fue el propio senador Inzunza quien lo implicó al decir que la acusación estadounidense tiene como propósito **afectar al tabasqueño**. Inevitablemente, López Obrador y lo que él consideraba su **“legado”** salen muy lastimados.

PORQUE resultó que en la 4T también habría **narcopolíticos**. Y porque el propio López Obrador se empeñó en hacer gobernador a Rocha Moya, pues éste confesó que perdió la encuesta de Morena, pero que AMLO ordenó imponerlo.

ASÍ QUE esta acusación ya se convirtió en la **mayor crisis del gobierno** de Claudia Sheinbaum. Si su administración resiste a la entrega de Rocha y socios, pondrá la confrontación con el gobierno y las cortes estadounidenses en el nivel más alto. Pero si accede, abre la puerta a **nuevas acusaciones**, aunque también podría venir una necesaria limpieza de la clase política.

POR LO PRONTO, la pregunta obligada hoy en la mañana es: ¿en serio va a dejar que el acusado siga gobernando Sinaloa?

• • •

POR CIERTO que hasta anoche no se conocía de algún pronunciamiento de gobernadores en apoyo a Rocha como sí ocurrió en agosto de 2024, cuando **“El Mayo” Zambada** lo implicó en el tema de su secuestro y envió a **Estados Unidos**. El miedo no anda en burro. **Américo Villarreal**, de Tamaulipas, debe estar preocupado o **Marina del Pilar Ávila**, de Baja California.

Y EN EL SENADO y la Cámara de Diputados, no solo había desconcierto y confusión entre los legisladores morenistas. Algunos de plano prefirieron evadir debates y entrevistas. Estaban desencajados.

BAJO RESERVA..

Entrega de Rocha a EU no será tersa

●● Nos hacen ver que tanto la postura asumida por la Cancillería mexicana, como la de la Fiscalía General de la República sobre la solicitud de detención y extradición del gobernador de Sinaloa, **Rubén Rocha Moya**, y nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de cinco cargos federales, entre ellos el de asociación delictuosa con el cártel de “Los Chapitos”, dejan ver que no será un proceso nada terso. De entrada, la Cancillería hizo notar que en la solicitud provisional de detención con fines de extradición no se presentaron pruebas. Luego, al dar conocer su postura sobre estas solicitudes, la Fiscalía General de la República volvió a señalar que no se presentaron pruebas que permitan solicitar una orden de aprehensión en contra de Rocha y los demás acusados, y dejó claro que, en el caso del gobernador, este no puede ser detenido ya que cuenta con fuero, por lo que sería necesario un juicio de procedencia para removerle dicha protección. Se vislumbra, nos dicen, un largo y complejo escenario político-diplomático-judicial.



Rubén Rocha

19 horas de angustia en Palacio Nacional

●● A las seis de la tarde del martes, el gobierno de México conoció que el gobierno de Estados Unidos quería en extradición al gobernador de Sinaloa, **Rubén Rocha Moya**, y otras nueve personas. 19 horas después Washington lanzó la bomba al dar a conocer la acusación que presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York al imputar a los funcionarios mexicanos delitos de narcotráfico y de trabajar para la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. ¿Qué sucedió en esas 19 horas que transcurrieron entre la notificación por parte de Estados Unidos? Pocos lo saben de cierto, pero, es posible que fueron horas de angustia al analizar cuáles son las implicaciones de extraditar o no extraditar al gobernador y los coacusados.



Claudia Sheinbaum

El senador que se esfumó

●● Una de las diez personas acusadas por Estados Unidos y solicitadas en extradición por delitos relacionados con narcotráfico, es el senador de Morena **Enrique Inzunza**. Nos hacen notar que el legislador sinaloense asistió la mañana de ayer al Senado, y como cualquier otro día, estuvo en la reunión previa de los senadores y pasó lista. Pero, luego del mediodía que se conoció la acusación en su contra, don Enrique se esfumó y ya no estuvo en la sesión. Y, lo mejor para él, es que justo ayer finalizó el periodo ordinario de sesiones y ya no tendrá que asistir esta semana al recinto de Paseo de la Reforma. A través de redes sociales intentó descalificar las acusaciones de Estados Unidos. A Inzunza lo declararon integrante de la Comisión Permanente que sesionará a partir del próximo miércoles. El senador, que tiene fuero y no puede ser detenido, ¿estará presente en la próxima semana en la sesión, o solo sabremos de él por sus redes sociales?



Enrique Inzunza

Sheinbaum alista visita a Palenque

●● La presidenta **Claudia Sheinbaum** se prepara para viajar a Palenque, Chiapas, lugar donde habita el expresidente **Andrés Manuel López Obrador**. Nos dicen que la visita, prevista para viernes y sábado, incluye la inauguración del Parque Ecoturístico “La Ceiba” y un acto en una escuela primaria. La agenda se desarrollará a unos cuantos kilómetros del rancho “La Chingada”, donde descansa el exmandatario. Se trata, nos comentan, de una gira programada con anticipación, y, hasta ahora, no hay información sobre la posibilidad de algún encuentro entre la Presidenta y el expresidente.



López Obrador

ROZONES

› Voto de ministra del pueblo... ¿contra el pueblo?

Nos dicen que a muchos llamó la atención la postura de **Lenia Batres** en contra de ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social que cubra las prótesis y aparatos auditivos a menores con discapacidad. En primer lugar, porque a todo México prometió que ella es la ministra del pueblo, una figura que asumió en aras de la defensa de los intereses de la gente y en particular de los más necesitados quienes, como ella misma ha dicho, históricamente han carecido de un sistema de justicia que los respalde. Bueno, pues esta vez, según el argumento que aportó, Batres Guadarrama decidió colocarse no necesariamente del lado del sector al que el proyecto buscaba proteger –y que finalmente lo hizo aun con su voto en contra–. “No podemos nosotros presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos”, dijo la ministra. Batres también destacó que las y los ministros del máximo tribunal del país deben emitir sentencias realizables y no votar por resoluciones al aire que, a su juicio, terminen convirtiéndose en demagogia. Qué tal.

› Captura relevante de agresores

Relevante, nos hacen ver, la captura rápida que se ha dado de los responsables del asesinato de una familia en Azcapotzalco, hecho que ha impactado fuertemente a la comunidad por el grado de violencia con que se cometió. Fue el secretario de Seguridad Ciudadana, **Pablo Vázquez**, quien ayer dio cuenta en el programa *Al Mediodía con Solórzano*, que se transmite en el canal de YouTube de *La Razón*, de cómo se dio el seguimiento de los presuntos responsables desde el sitio donde se cometieron los delitos –porque además del multihomicidio hubo robo de bienes– hasta el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Gracias a esa colaboración entre policías y fiscalías capitalina y mexiquense se llevó a cabo la captura de cuatro personas que estarían involucradas en los hechos, de las que se indaga para confirmar la versión que habría sido una la que le quitó la vida a la familia. El funcionario se ha comprometido a que en el caso, en el que se apunta a que pudiera estar relacionado con un tema de despojo, habrá justicia.

› Layda en quiebra

Con la novedad de que a cinco meses de iniciar su último año de gestión, **Layda Sansores** ha dado cuenta de que el gobierno de Campeche no tiene liquidez ni para pagar la luz. Ah, pero no sólo eso, sino que resulta que ya advirtió que si le llega la cuenta de electricidad –la cual le enviaría una empresa a cargo del Gobierno federal como en este caso es la CFE– no la piensa pagar. Ha dicho que mejor apagará todo. “Yo ya les dije, ya fuimos a México: la próxima vez, que nos apaguen la luz; cuando no tengamos dinero, no la voy a pagar ni voy a pedir prestado ni prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan porque no tenemos recursos”, amagó. La gobernadora morenista se ha cuidado de no señalar a funcionarios federales, y ha preferido arremeter contra la “fórmula maldita” establecida en Ley de Coordinación Fiscal heredada, según dijo, de “la derecha” a la que achaca un “recorte”. En la entidad, nos recuerdan, se aprobó para esta año un endeudamiento de mil millones, pero Sansores ha preferido escalar el desafío en espera de que quizá Hacienda le resuelva el desastre. Pendientes.

› Le dan el sí a Máynez

Si bien, nos advierten, era cuestión de tiempo que la alcaldesa de León, **Alejandra Gutiérrez**, se pasara a MC tras renunciar al PAN, algunos destacan lo rápido que terminó por dar el brazo a torcer ante la insistencia del dirigente nacional del movimiento naranja, **Jorge Álvarez Máynez**. Dicen que tampoco es para menos, pues finalmente son tiempos de definiciones y la carrera —no oficial— rumbo a las elecciones de 2027 y luego las del 2030 ya está más que empezada, por lo que el arropamiento que recibió Alejandra tras darle el sí a los emecistas viene acompañado de su velada, pero bien cantada nominación como próxima candidata de ese partido a la gubernatura de Guanajuato. Lo que está por verse, varios señalan, es si la fórmula de quitar fichas a otro partido —el PAN, en este caso—, alcanzará para arrebatar también a los blanquiazules uno de sus históricos bastiones, ya que Guanajuato no sólo ha sido conocido por su apoyo casi incondicional a Acción Nacional sino por ser la entidad que más votos ha aportado a esta fuerza política en las recientes elecciones presidenciales. ¿Lograrán revertirlo?

› Advertencias a Montiel

Todavía no se oficializa la posición de **Ariadna Montiel** en la dirigencia nacional de Morena y ya comenzó a recibir quejas de los problemitas que arrastra el partido en el poder. Destacó la inconformidad que externó ayer el senador zacatecano **Saúl Monreal**, quien aunque no acusó directamente que nomás no lo han dejado competir por la candidatura guinda al gobierno de Zacatecas, no se guardó lo incómodo que para él han sido “los sectarismos” que se han formado en el partido, al menos en los estados, principalmente en su natal Zacatecas, donde gobierna su hermano **David** y donde —ya antes había reclamado— no le han dado el suficiente apoyo para llevar a buen puerto sus aspiraciones políticas que insiste en desmarcar del nepotismo que todos —menos él— ven. Aunque nos dicen que nadie se atrevería a apostar que Saúl tendrá mejor suerte con Ariadna al frente de los morenistas, nos indican que el reciente pronunciamiento del menor de los Monreal sí ha servido para imprimir una nueva radiografía de las fallas y las necesidades que ha arrastrado Morena en los últimos años y que ya no encontraron solución bajo la tutela de **Luisa María Alcalde**.

› Aguas turbias en caso Manzo

Comentan que, en medio de la investigación a raíz del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, **Carlos Manzo**, una nueva acusación comenzó a generar otro frente —y muy ruidoso— desde la propia familia del edil asesinado. Se trata de los señalamientos que hizo su propio hermano, **Juan Manzo**, ojo, no en contra de las autoridades que llevan a cabo las pesquisas, sino del ayuntamiento de Uruapan, hoy encabezado por la viuda del expresidente municipal, **Grecia Quiroz**. En sus redes sociales, el hermano del occiso —que, por cierto, se desempeña como subsecretario de Gobernación de Michoacán— lamentó que la administración de su cuñada “esté pagando la defensa de los escoltas acusados de facilitar el homicidio” de Carlos. Nos hacen ver que, además del desencuentro familiar que estas declaraciones implican, la postura de Juan Manzo en torno a los escoltas de su hermano, contrasta con la del diputado local **Carlos Bautista Tafolla**, integrante del Movimiento del Sombrero, quien ha dicho que la detención de estos custodios no es más que una “cortina de humo”, ya que, declaró, uno de ellos incluso era para el exalcalde casi casi como un padre.

 **Sacapuntas**



RUBÉN ROCHA MOYA

Rocha lo niega todo

Con un mensaje en redes sociales respondió el gobernador de Sinaloa, **Rubén Rocha**, a la acusación de Estados Unidos en su contra por presunto narcotráfico. Minutos después de difundida la noticia, el mandatario estatal rechazó las imputaciones presentadas por el fiscal **Jay Clayton** ante la Corte Sur de New York. “Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, consideró. Dijo haber platicado con la presidenta Sheinbaum y que, por ahora, se mantiene en el cargo.

ENRIQUE INZUNZA



Inzunza se esfuma del Senado

También el senador de Morena **Enrique Inzunza** negó estar involucrado en los delitos que le imputaron en EU. Ayer pasó lista en el Senado, pero tras conocerse la acusación en su contra desapareció del recinto. Más tarde difundió en redes sociales su postura, que no varía mucho de la de su paisano el gobernador de Sinaloa, **Rubén Rocha Moya**.

ULISES LARA



FGR pide pruebas a EU

Si bien la Fiscalía General de la República, al mando de **Ernestina Godoy**, indicó que abrirá una investigación propia para saber si hay sustento en las acusaciones contra políticos de Morena, pidió pruebas a EU. El vocero de la dependencia, **Ulises Lara**, indicó que la extradición está condicionada a que se presenten evidencias sólidas.

MARU CAMPOS



Maru sale ganando

Por cierto, la gobernadora de Chihuahua, **Maru Campos**, resultó beneficiada con la *bomba* informativa detonada ayer contra el sinaloense **Rubén Rocha** y otros personajes de Morena. Y es que ahora queda en segundo plano el tema de los agentes de la embajada de EU en México fallecidos en territorio chihuahuense en un accidente carretero.

CLAUDIA SHEINBAUM



Con España, se avanza

Pese a la coyuntura, es de rescatar la reunión que sostuvieron la presidenta Sheinbaum y el ministro de Exteriores de España, **José Manuel Albares**, y después el mensaje conjunto con el canciller **Roberto Velasco**. Y es que sellaron la voluntad bilateral para avanzar en áreas de cultura, ciencia, defensa de la democracia y la agenda multilateral conjunta.

FÉLIX SALGADO MACEDONIO



Dice Félix que no va

Tras muchos jaloneos, el senador **Félix Salgado Macedonio** no sólo confirmó que deja de lado sus aspiraciones por la gubernatura de Guerrero, sino que se mantendrá en la Cámara alta y no pedirá licencia. Según él, deja la vía libre a sus compañeras **Beatriz Mojica** y **Esthela Damián**, que van por la candidatura morenista.

CYNTHIA LÓPEZ CASTRO



Se apunta a la Cuauhtémoc

Como en la CDMX es temporada de destapes, la senadora **Cynthia López Castro** anunció su intención de buscar la alcaldía Cuauhtémoc, “el corazón de la CDMX”. Al rendir su informe de actividades, ayer, fue arropada por figuras de Morena como el coordinador **Ignacio Mier**, **Pedro Haces** y el vicepresidente del Senado, **Sergio Gutiérrez Luna**.

FRENTE POLÍTICOS

1. Imputación. El expediente que cruza la frontera coloca al gobernador de Sinaloa, **Rubén Rocha**, en una escena que la política local ya no controla, con fiscales de Nueva York acusando vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras en casa se invoca soberanía. **Jay Clayton**, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, y **Terrance C. Cole**, administrador de la DEA, abrieron un frente judicial. La causa quedó en manos de la jueza federal **Katherine Polk**, donde los tiempos son de tribunal, no de plaza pública. **Rocha** responde con descalificación y arroja el caso en la bandera de la 4T, pero el expediente enumera malas conductas y nombres. ¿Barbas a remojar?

2. Eficacia al cien. En una jornada en la que hubo mucho ruido político, sobre todo con el gobierno de EU, el canciller **Roberto Velasco Álvarez** actuó como se esperaba. Con rapidez diplomática respondió sobre el caso **Rocha Moya**. También atendió una reunión pactada con el gobierno español y de la que se lograron avances significativos. El encuentro con su homólogo de Asuntos Exteriores de España, **José Manuel Albares**, dejó buen sabor, pues el funcionario reconoció la buena salud que goza la relación bilateral de las dos naciones. Que siga así.

3. Advertencia. Desde la embajada de EU en México, **Ronald Johnson** dejó claro que el expediente contra **Rubén Rocha** no es un episodio aislado ni negociable en el terreno político. Asegura que no habrá impunidad cuando la corrupción cruce la línea y se conecte con el crimen organizado. **Johnson** no entra en detalles, el proceso judicial manda, pero sí fija el marco, todo acto que facilite redes criminales será perseguido. La frase marca una postura institucional que trasciende a los nombres propios y coloca el foco en un principio operativo, cooperación sí, pero con cero tolerancia. La alianza bilateral está en juego, que no se olvide.

4. Persistencia. **Maru Campos**, gobernadora de Chihuahua, colocó la seguridad en el centro de su discurso tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, un golpe operativo que intenta sostener el control en una entidad donde la violencia no concede treguas. **Campos** se mueve entre resultados puntuales y una presión constante por hechos que siguen bajo investigación, mientras confirma coordinación con la Federación. Frente a empresarios, con **Javier Alvidrez**, presidente de Coparmex Delicias, el mensaje fue de certidumbre económica atada a calles seguras. Chihuahua se reconstruye.

5. Inhumana. Fiel a su estilo, **Lenia Batres** votó en contra de obligar al IMSS a proporcionar implantes cocleares a menores, pues argumentó falta de recursos en la institución. Al parecer a la autollamada *Ministra del Pueblo* no le importa que, sin esta intervención antes de los cinco años, los niños pueden perder la audición, ni mucho menos el marco constitucional o los acuerdos internacionales. Quizá piensa que esta medida se aplique en el ISSSTE, encabezado por su hermano **Martí**, a quien recientemente se le eximió del pago de 5 mil 800 mdp al gobierno de la CDMX. Los recursos se asignan según ciertas prioridades, pero para **Batres**, los niños con discapacidad, no figuran entre ellas.

TRASCENDIÓ

Que el domingo se despejará la incógnita sobre si el gobernador de Sinaloa, **Rubén Rocha Moya**, asistirá al Consejo Nacional de Morena, del que forma parte, donde se definirá el relevo en la dirigencia del partido y si lo recibirán con el grito de “¡no estás solo!” que varios guindas, en teoría, quisieran soltar. Aunque ya hay señales discretas de cierre de filas, hasta anoche no se conocía de algún desplegado como el que publicaron todos los gobernadores de la 4T, cuando **Mario Delgado** estaba al frente del CEN, en defensa del hoy objetivo público de la DEA.

Que “para eso me gustaban”, se oyó en los pasillos de San Lázaro cuando el vocero cameral de Morena, **Arturo Ávila**, respondió que para que exista un **García Luna** actual debe haber sentencia y condena de juez, aunque, eso sí, se apuró a aclarar que no “mete las manos al fuego por nadie”, incluido **Rubén Rocha**, por supuesto. Al final fue el líder de la bancada, **Ricardo Monreal**, quien salió a confrontar a los panistas por lo que llamó “acusaciones partidistas y expresiones electoreras”, ante las que pidió esperar la decisión de la Fiscalía General de la República sobre la solicitud de extradición.

Que en el cierre de su primer mes como canciller, **Roberto Velasco** enfrenta uno de los momentos más difíciles de la relación con Estados Unidos por el caso **Rubén Rocha**. Tanto, que ayer entró y salió de Palacio Nacional varias veces, igual que otros funcionarios, como la titular de Gobernación, **Rosa Icela Rodríguez**, además de atender asuntos adicionales propios de las relaciones exteriores. No faltaron quienes creen que algo habrá sabido a tiempo el renunciante **Juan Ramón de la Fuente...**

Que un personaje muy activo en San Lázaro fue **Ariadna Montiel**, terminando de allanar su camino hacia la presidencia de Morena, porque lejos de incurrir en exceso de confianza y dar por descontada su elección, la ex secretaria de Bienestar sostuvo encuentros por separado con **Ricardo Monreal**, líder de la bancada guinda, y el vicecoordinador **Alfonso Ramírez Cuéllar**, logrando el respaldo de ambos para relevar a **Luisa María Alcalde** el próximo domingo. ■

ASTILLERO

Rocha Moya es un (fundado) pretexto // Trump y CIA van contra 4T // Entrampar a la Presidenta // Rescatar a la soldada Maru

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

UN SECO GOLPE de Estados Unidos coloca en circunstancias difíciles a la presidenta Sheinbaum, al proceso llamado Cuarta Transformación y a su partido en ruta de cambio dominical de dirigencia y posterior designación de candidatos a puestos de elección popular.

NO SE TRATA solamente de Rubén Rocha Moya, indefendible en absoluto: es un jaque trumpiano que busca someter (aún más) a México en cuanto a su intento de diversificación de alianzas (el encuentro progresista de Barcelona), que rescata del escenario a la pro yanqui gobernadora panista María Eugenia Campos y, en ese lance vengativo, reivindica a la CIA y su “derecho” a intervenir en México, además de intentar el remache de la etiqueta de *narcopartido* a Morena y de *narcopresidentes* a los dos recientes (esa etiquetación ha sido machaconamente sostenida desde antes de las elecciones de 2024) y que busca doblegar (aún más) a México en el proceso del rediseño comercial que supla al T-MEC.

CIERTO ES QUE se está frente a una fase de un proceso judicial estadounidense en forma. Es decir, en la forma que se puede idealizar peliulescamente, aunque haya un gran contraste con la realidad de un sistema que permite a un delincuente sentenciado ser presidente de Estados Unidos. El inicio de ese proceso judicial fue el 4 de abril de 2023, en el contexto de las acusaciones contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (*chapitos*) en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. Lo dado a conocer ayer es la novena ampliación de la acusación formal en el expediente S9 23 Cr. 180 c, que en esta versión incluye al gobernador de Sinaloa, a un senador en funciones y a funcionarios y ex funcionarios de diversos niveles.

DESDE LUEGO, NO son la instancia “justiciera” medianamente aceptable ni Estados Unidos (principal consumidor de drogas, con sus propios cárteles internos y tráfico

de armas hacia el sur) ni Donald Trump (con el expediente Epstein a cuestas, y los crímenes, no sólo de guerra, que ha ordenado o propiciado; casablanqueador naranja que indultó al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, sentenciado que cumplía en Estados Unidos su condena como narcotraficante).

EL DISPARO DE los *halcones* gringos va dirigido al corazón del sistema que ha ido construyendo el obradorismo en sus dos etapas, primero y segundo piso. Ha de reiterarse que Rocha Moya es indefendible, por su elección en la que personas armadas secuestraron el día de las urnas al equipo operativo del opositor priísta, Mario Zamora, y por el posterior ejercicio deplorable del poder, con un episodio determinante el 25 de julio de 2024, cuando fue secuestrado Ismael Zambada, *El Mayo*, para llevarlo a Estados Unidos, y asesinado el principal opositor al gobernador, Héctor Melesio Cuén Ojeda (incluso se fingió un asalto a una camioneta para “explicar” el crimen).

TRUMP O QUIENES definen y deciden este tipo de acciones buscan entrampar a la Presidenta, pues si no cede a la petición de extradición de Rocha Moya será duramente atacada mediática y políticamente por el poder gringo y sus aliados en México. La confrontación escalaría, según versiones en curso promovidas desde la embajada boina verde, contra otros personajes políticos, de alto nivel, y sus familiares y allegados. La etiquetación de *narcoestado* daría combustible a la pelea contra el nuevo Poder Judicial y a los grupos opositores que hasta ahora no han podido recuperarse política y electoralmente.

FINALMENTE: NO PARECIERA que el estilo tradicional de comunicados de gobernadores y partido, de disquisiciones jurídicas (la FGR ya está en eso) y cierre de filas de la élite morenista sea eficaz ante la acometida mayor del trumpismo, de la CIA. La Presidenta está ante un dilema de cuya resolución dependerá buena parte del futuro del proceso 4T y de la aspiración de soberanía y progresismo en las cuotas que la aplastante realidad permita. ¡Hasta el próximo lunes!

EL CABALLITO..

En 48 horas, van 7 asesinatos en Azcapotzalco

●●Le platicamos que en 48 horas, se registraron 7 homicidios en la alcaldía Azcapotzalco. El lunes se descubrieron los cadáveres de cuatro integrantes de una familia que fue acuchillada en su casa en la colonia Nueva Santa María. Si bien en las siguientes horas se detuvo a cuatro presuntos involucrados, entre ellos el presunto autor material de los asesinatos, aún falta que las autoridades esclarezcan el móvil, pues aunque se habla de que la principal línea apunta al robo, todavía falta clarificar la presencia de una mensaje que mencionaba una deuda. Ayer se localizaron tres cadáveres en la unidad habitacional Francisco Villa con disparo de arma de fuego. Muertes de alto impacto que encienden los focos rojos tanto para **Pablo Vázquez**, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como para **Bertha Alcalde**, fiscal de la Ciudad de México.



Pablo Vázquez

Próxima Utopía llega a la Venustiano Carranza

●●Nos cuentan que la promesa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, **Clara Brugada**, de entregar una Utopía cada 15 días va tomando cada vez más forma, pues durante la presentación de los festivales futboleros, se dio a conocer que uno de estos espacios por el Mundial será habilitado en la Utopía Deportivo Eduardo Molina, en la Venustiano Carranza. A esta se suma la Utopía de Mixhiuca y la de las Infancias en Azcapotzalco, que abrirá desde hoy, con motivo del Día del Niño.



Clara Brugada

¿Acaban hoy las obras en Periférico Norte?

●●Tras cuatro meses de labores, este 30 de abril se cumple el plazo fijado por las autoridades, para la rehabilitación del Periférico Norte que comenzó a inicios de enero de este año. De acuerdo con el director de la Junta de Caminos del Estado de México, **Joel González Toral**, a partir de este jueves ya no deberá haber cortes vehiculares y los automovilistas podrán disfrutar de la carpeta asfáltica rehabilitada. Sin embargo, aún continuarán con las labores complementarias como son la instalación de iluminación, balizamiento y señalética. Nos adelantamos que se estima que la inauguración de la obra se realice la primera quincena de mayo y será encabezada por la gobernadora **Delfina Gómez**.



Joel González

+ OPINIÓN

COMENTARIOS

LUIS MANUEL
NOVELO

novvel_luis@yahoo.com.mx

Reconoció DGA labor de militares

Durante la Mesa de Paz, la gobernadora del Estado de México **Delfina Gómez Álvarez** entregó un reconocimiento a los generales **Lucio Vergara Gómez** y **José Antonio Sierra Amador**, por su destacada labor en favor de la tranquilidad de las y los mexiquenses, señaló, “misma que fortalece la percepción de seguridad en el Estado de México”. Por cierto, la gobernadora mexiquense debe estar muy contenta por la encuesta realizada por la empresa Enkoll, que la coloca con un 60 por ciento de aceptación ciudadana. La gobernadora **Delfina Gómez** goza de gran popularidad y aceptación, debido a su cercanía y calidez con la gente. Es una política a la que el poder no se le subió a la cabeza, como a muchas y muchos que adoptan poses de integrantes de la más rancia realeza. La gobernadora se muestra sencilla, saluda y platica con la gente, porque sabe que su papel de servidora pública es ese, atender al pueblo y trabajar para él.

En el Tianguis Turístico de Acapulco, destaca Tlalnepantla, el municipio que gobierna el alcalde **Raciel Pérez Cruz**, al promover su riqueza artesanal y su capacidad como destino emergente para el turismo de reuniones, alineándose con las tendencias globales y la proyección que traerán eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es decir, buscan consolidarse como una opción competitiva dentro de la región para generar derrama económica.

Cayó el subdirector de Seguridad de Xalatlaco, quien apareció golpeando brutalmente a su expareja sentimental, además de que también fue señalado por delitos de cohecho y contra la salud. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad estatal fueron los que detuvieron a Edgar “N” quien fue videograbado cuando la víctima intentaba salir de un domicilio ubicado en la colonia La Florida del municipio de Almoloya del Río, momento en el que Edgar “N” la agredió físicamente.

El alcalde de Naucalpan **Isaac Montoya**, aclaró en un video subido a sus redes sociales, que el proyecto de Río Hondo será un espacio de recreación y no edificios como han dicho sus adversarios.

Este mes tuvo lugar el relevo de tres integrantes del Consejo General del INE; se trató del proceso de renovación parcial que cada tres años tiene lugar en este órgano de dirección institucional. La principal virtud de este mecanismo es evitar que la totalidad de los integrantes de ese consejo sea decidida por una sola legislatura y la correlación de fuerzas que en ella prevalezca. En esta ocasión dejaron sus cargos, tras nueve años de ejercicio, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. Designados por amplísima mayoría de la Cámara de Diputados en 2017, fueron la última generación de consejeros nombrados por consenso (abierto y público; no descubrió nada nuevo) del PAN, PRI y PRD, en aquel momento las fuerzas más votadas del espectro partidista.

El principal problema de decA lo largo de casi seis años de trabajar juntos, tuve con ellos grandes convergencias y grandes divergencias, como debe ser en un órgano colegiado en el que los actos de cada individuo responden a sus distintas convicciones y perspectivas de la democracia, la política y la República. Tuvimos posiciones claramente opuestas

Viejos caminos, nuevos caminos

DISIENTO

Uuc-kib Espadas

Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral

@Uuckib



cuando, en 2021, el INE canceló las candidaturas a gobernadores de sus respectivos estados de Félix Salgado y Raúl Morón. Caminamos juntos, por cierto, en filas cerradas con todos los demás consejeros, en 2022, cuando, en represalia por aquellas cancelaciones, el gobierno federal lanzó

la peor embestida que la autonomía de la autoridad electoral ha sufrido desde que existe. Compartimos plenamente preocupaciones por las irregularidades registradas en la elección judicial de 2025, y así votamos, alcanzando la unanimidad, por excluir las casillas correspondientes del cómputo final de esta; pero tuvimos posiciones fuertemente opuestas sobre la validez de la elección una vez depuradas las irregularidades.

A lo largo de estos años compartimos alegrías y rabias. Rabiamos unos contra otros, nos alzamos la voz pocas veces y también festejamos éxitos comunes. Nos reprochamos y nos felicitamos; nos calificamos y descalificamos, incluyendo elefantes imaginarios y reales que hasta volaron en la sala; intercambiamos aspavientos y nos dolimos de pérdidas. Fue una relación compleja. Uno no viene a estos organismos a hacer amigos, nos recordaba Martín Faz en la última sesión a la que a nuestros antiguos colegas asis-

tieron; sin embargo, añadido yo, la convivencia diaria, el debate, los acercamientos y alejamientos en torno a posiciones políticas, y en ellas vencer y ser vencidos, ofrece, sí, la invaluable oportunidad de aprender de quien piensa distinto, de quien recorrió antes los mismos caminos, y de quien no recorrió los mismos caminos que uno.

Esa etapa se ha cerrado. Lo más probable, con mucho, es que no vuelva yo a tener el mismo nivel de convivencia y de deber compartido con ninguno de los tres nunca más; sin embargo, en este tiempo, han dejado en mí diversas huellas, que en mayor o menor medida, me acompañarán, al menos por algún tiempo (vamos, que a estas alturas de la vida hablar de mucho tiempo puede ya resultar de un optimismo temerario).

Hoy, tras casi una década, los tres andan nuevos caminos. Especulo que, en su regreso a la academia, Jaime verá los estudios electorales de manera distinta a como lo hacía antes

de dejarla; Dania quizá explore caminos de militancia que hasta hace semanas le estaban vedados, y Claudia volverá a centrarse en el ejercicio del derecho, en escenarios sustancialmente distintos a los conocidos. No lo sé, solo imagino.

Sé, sí, que, en cualquier caso, la persecución ilegal de la que hoy son objeto por el sentido de uno de sus votos en el pasado es, además, ilegítima: en democracia y dentro del Estado de derecho, la vigilancia administrativa no se puede convertir en control político, haciendo de los controladores comisarios al estilo soviético. La función electoral exige que sus depositarios puedan votar estrictamente dentro de sus convicciones, so pena de adular el debido funcionamiento de los órganos correspondientes. Esta libertad para votar es exactamente la misma que asiste a los legisladores, aunque no se legitime en la misma fuente, el voto popular, pues protege a las instituciones electorales antes que cualquier otra cosa. Sancionar eventuales incumplimientos legales de los consejeros electorales corresponde al Congreso. A nadie más.

El INE y Valledupar



**Por Rubén
Moreira Valdez**

Diputado federal
@rubenmoreiravdz

Sin pudor por el atraco cometido y sin la menor intención de construir legitimidad, Morena designó a tres integrantes del Instituto Nacional Electoral. El proceso fue a contrarreloj y carente de pulcritud. Especialistas y académicos hicieron notar los defectos en la selección de quienes tendrán tareas de suma importancia en los próximos comicios.

En 2027 hay elecciones regulares en el orden federal y local. Se renueva la Cámara de Diputados con sus 500 escaños y 17 gubernaturas, miles de alcaldías y decenas de congresos locales. Incluso hay entidades donde se compite en boleta por separado por sindicaturas y órganos menores. A todo lo anterior hay que sumar la elec-

ción de integrantes de los órganos juzgadores federales y locales.

Es una elección compleja e inédita. Las reglas para la selección de los juzgadores son deficientes y complicadas. Fueron redactadas con el ánimo de venganza de López Obrador y la ignorancia y sumisión de colaboradores incapaces de controvertir a su superior. En los hechos, la Constitución no se aplicó en sus términos en el proceso de 2025 y vimos al INE hacer malabares para cumplir con su responsabilidad. El fracaso fue monumental y la abstención constituyó uno de los factores de este resultado.

A Morena le interesa mantener el poder. Todo menos perder. Sus directivos no van a dudar en usar sus mejores trucos para robarse los comicios. Los amos de los acordeones están en espera y su actuación desatará envidias hasta en los maestros de Valledupar.

**ARTURO SÁNCHEZ**Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales
y Gobierno Tecnológico de Monterrey

@ArturoSanchezG

El Consejo General

Ser parte de la llamada "Herradura de la Democracia", la mesa del Consejo General del INE, es un honor para cualquier demócrata mexicano.

Su integración se diseñó para reflejar la pluralidad de nuestra sociedad, bajo el principio fundamental de la imparcialidad con la que deben organizarse las elecciones en México.

En esa mesa se contrastan puntos de vista sobre la interpretación de las normas electorales, se presentan iniciativas para atender las circunstancias de la coyuntura y fomentar la democracia, se escuchan a los partidos políticos y a las voces del Congreso de la Unión, pero, sobre todo, se construyen acuerdos y se resuelven controversias. De ahí la importancia de su pluralidad, independencia e imparcialidad.

En la mesa del Consejo General la fortaleza de cada consejería reside en la calidad de sus argumentos. Los votos para cada acuerdo, para cada resolución, para decidir si procede sancionar o no a un partido, o simplemente para definir un procedimiento electoral, debe ser sustentado con un estudio cuidadoso del tema.

Los argumentos de las consejerías no sólo deben fundamentar legalmente la decisión, sino motivar su pertinencia y convencer a la sociedad de cada paso que se da para organizar una elección. Cada intervención queda grabada, pues el acta de las sesiones es la versión estenográfica de las mismas.

El otro actor fundamental de esa mesa es su presidencia. De ella depende la buena conducción de las sesiones, pero sobre

todo de la calidad del debate. Ella es prima entre pares, por lo que la calidad de su argumentación es siempre una guía que debe abrir el diálogo, incorporar posiciones y construir acuerdos.

Las discrepancias son comunes en el debate, particularmente con los partidos políticos, pero a pesar de ello, el orden, el respeto y la colegialidad de las decisiones es su responsabilidad, pues son garantía para la construcción de acuerdos.

Esta semana, el Consejo General inició una nueva etapa con la incorporación de las consejerías de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Dennise Gómez Puga y Arturo Manuel Chavez López.

Su llegada fue polémica por la opacidad del procedimiento para sus nombramientos y sus antecedentes y vínculos políticos. Su papel se medirá con el estudio, conocimiento y argumentación en cada debate del Consejo.

La fuerza y calidad de sus argumentos y sus votos hablarán por ellas y él. Por lo pronto, el lunes pasado se realizaron tres sesiones del Consejo General. En ninguna de ellas las nuevas consejerías hicieron uso de la palabra.

Quizá sea pronto para evaluar, pero, por ejemplo, votaron con la nueva mayoría temas y criterios de fiscalización con los que ya sentaron precedente de su posición, sin argumentación alguna. Habría sido interesante escuchar sus puntos de vista, pues de las demás consejerías ya conocemos su opinión. La credibilidad y confianza en la elección del próximo año dependerá de la calidad de la integración del nuevo Consejo General.

Esténtor político

Miguel Ángel Casique Olivos
mcasiquem@gmail.com

MÉXICO RUMBO A ELECCIONES Y MÁS INSEGURIDAD

Está por terminar el *primer cuatrimestre de 2026* y tanto en el *Gobierno Federal* como en los estados se evade atender la seguridad de los ciudadanos. Dos hechos ocurridos recientemente no pueden ni deben ser ignorados: el primero fue el *lunes 20 de abril*, cuando *Julio César Jasso Ramírez* ingresó a la zona arqueológica de *Teotihuacán*, subió a la *Pirámide de la Luna* y, tras algunas amenazas, comenzó a disparar a los turistas donde perdió la vida una visitante canadiense, hubo más de *cinco heridos* y finalmente él "se quitó" la vida. Más allá de las hipótesis difundidas: que fue un fanático; si había sido "elegido" o no por los dioses; o de relacionar el hecho con lo encontrado en su casa (carteles y fotografías sobre la saga de superhéroes, referencias a Hitler en sus redes sociales o de las menciones a la masacre escolar de *Columbine, Estados Unidos*, etc.), resulta curioso ver cómo los "investigadores" del gobierno toman esos elementos para continuar la narrativa y orientarla como cierre del episodio y que se vuelva un hecho más sin referirse, al menos en parte, a la *responsabilidad de las autoridades estatales o*

federales debido a la escasa seguridad de los centros arqueológicos y culturales en el país.

El segundo hecho está relacionado con el anuncio de posibles movimientos políticos en una no bien planeada reconfiguración interna en *Morena*, con lo que se separaría de su cargo a *Andrés Manuel López Beltrán* (Andy), quien dejaría la *Secretaría de Organización del partido*; esto se anunció mientras circulaban versiones sobre la posible salida de *Luisa María Alcalde* de la *dirigencia nacional de Morena*; quienes podrían sustituirlos son *Estela Damián Peralta*, en el primer caso, y la actual *consejera jurídica de la Presidencia, Ariadna Montiel*, como una opción para asumir el liderazgo del morenismo.

El cambio de piezas "en el ajedrez político" de *Morena* y en la *antesala electoral del 2027*, como sucede en cualquier otra elección, son comunes; pero resulta destacable cuando se filtra información sobre problemas de unidad y falta de acuerdos para nombrar a sus candidatos de cara a los puestos de elección popular y, desde

luego, la poca certeza dominante en cada organismo político para lograr el triunfo en las urnas, como es el caso de *Morena*.

Tanto el atentado ocurrido en *Teotihuacán*, como el anuncio de movimientos en la *dirigencia morenista*, indican que las cosas no están bien; y existe seria preocupación sobre lo que pueda pasar en *2027* cuando se elijan *17 gobernaturas, congresos locales* y más de *dos mil ayuntamientos*; además de *500 diputados federales* que conformarán la *nueva Cámara*; y si le sumamos la intención de realizar la consulta de revocación de mandato de la *Presidenta*, la situación se torna compleja.

El partido oficial es la primera fuerza política de *México*, pero prácticamente desde *2018*, es decir, durante ocho años ya, se ha movido entre decenas de crisis, sobre todo por los actos de corrupción de sus principales militantes y por sus vínculos con el narcotráfico. Y sumemos a esto la crisis de inseguridad registrada diariamente en entidades gobernadas por *Morena*, como *Oaxaca, Puebla o Veracruz*.

"El juego" democrático no siempre es limpio, más bien al contrario; y los partidos políticos opositores han recurrido a la guerra sucia contra los partidos oficiales con tal de apropiarse del poder a como dé lugar; así lo hicieron el extinto *Partido de la Revolución Democrática, Morena o Acción Nacional* cuando el *Revolucionario Institucional* era partido oficial; hoy la historia se repite; y entre los pasillos del poder se asegura que ya empiezan a "poner más piedras en el camino" a *Morena*; así se explicaría, en parte, el incremento de actos como lo ocurrido en *Teotihuacán* o los constantes asesinatos en *Oaxaca* y otras entidades del país. Por el momento, querido lector, es todo.



PUENTE POLÍTICO

OPINIÓN



**LAURA
PUENTE**

Citlalli llega a apagar el fuego... crece la tensión en SLP

San Luis Potosí se perfila como uno de los tableros más complejos rumbo a 2027. No es sólo una elección local, es una disputa por el control político dentro de la alianza gobernante. En el centro está el gobernador **Ricardo Gallardo**, quien busca extender su influencia impulsando a su esposa, la senadora **Ruth González**, como candidata a la gubernatura. Sin embargo, el escenario se ha ido cerrando.

La lógica de continuidad enfrenta resistencias internas y el costo político de una sucesión directa empieza a incomodar incluso a quienes han sido sus aliados.

Morena ha sido claro: no al nepotismo. La eventual candidatura de la esposa del gobernador choca de frente con los estatutos y principios del partido guinda, por lo que, bajo ese escenario, una alianza sin condiciones luce inviable.

En este contexto, la llegada de **Citlalli Hernández** a la operación electoral no es menor. Su papel no es sólo organizar una elección, sino destrabar un conflicto: mantener la alianza con el Partido Verde, pero sin entregar la candidatura.

La intención de preservar esa alianza no responde únicamente a la coyuntura local, sino a una estrategia nacional, evitar que los aliados terminen marcando la ruta política del movimiento. El problema es que esa decisión no ocurre en terreno neutral.

La insistencia del grupo en el poder por posicionar a **Ruth González Silva** abre un frente de tensión que rebasa al estado. Lo que está en juego no es sólo una candidatura, sino el precedente: si Morena cede aquí, abre la puerta a que en otras entidades sus aliados intenten imponer condiciones similares. Y eso, en plena reconfiguración del poder rumbo a 2027, es un riesgo que pocos dentro del partido están dispuestos a asumir.

Mientras tanto, comienzan a tomar forma las alternativas. Perfiles como **Guillermo Morales López, delegado de la Secretaría de Bienestar; Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; y el diputado Juan Carlos Valladares** avanzan como opciones viables rumbo a la gubernatura.

No son candidaturas definidas, pero sí señales claras de que Morena está construyendo salidas para evitar una ruptura mayor y, al mismo tiempo, intentar sostener la alianza con el PVEM.

En ese tablero, el reacomodo aparece como la vía más pragmática, mantener a **Ruth González** en el Senado o moverla hacia la capital, sin forzar una candidatura que hoy divide más de lo que suma.

El fondo del asunto es político y nacional. La operación en San Luis Potosí ya genera roces dentro de Morena y también con sus aliados, porque pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién manda realmente en la coalición? La intervención de **Citlalli Hernández** no sólo busca ordenar una elección, sino fijar límites. Y esos límites, inevitablemente, generan fricción.

Porque si algo está claro es que San Luis Potosí dejó de ser un asunto local. Se convirtió en un termómetro del poder real dentro de Morena. Y lo que ahí se decida no sólo definirá una gubernatura, marcará hasta dónde el partido está dispuesto a tensar la cuerda con sus aliados para no perder el control de su propio proyecto. En política, esas batallas no se anuncian... se ejecutan. Y ésta ya empezó. 🔴

LAU.PUENTEE@GMAIL.COM / @LAURAPUENTEN

Golpe a la 4T

●● ALFONSO ZÁRATE

El 29 de abril marca un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de la compleja relación de Estados Unidos con México. La decisión del Departamento de Justicia, a través del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de acusar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a personal que presta o prestó sus servicios en su gobierno por su protección al narcotráfico a cambio de “sobornos cuantiosos”, es demoledora. A esas acusaciones se agrega la participación de uno de los imputados (Juan Valenzuela Millán) en el secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA y un familiar.

Durante las elecciones de 2021, en las que Rocha resultó electo como gobernador, el Cártel de Sinaloa operó con un cinismo brutal a favor de Morena: “bajó” a punta de pistola a candidatos incómodos, “levantó” a decenas de operadores del PRI, asaltó casillas y robó urnas. En otro momento este escritor advirtió que un pacto de esa envergadura del Cártel con Morena requería la aprobación del mandamás, no del delegado en ese proceso, Américo Villarreal, ni del candidato a gobernador, Rubén Rocha, ni siquiera del entonces presidente del partido, Mario Delgado, sino del jefe de jefes, que habría decidido pactar con el diablo.

El entonces gobernador Quirino Ordaz, hoy embajador de México ante España, entregó la plaza y calló ante la arremetida de los Chapitos. A partir de los primeros días de su gobierno, Rocha Moya ajustó las piezas, significativamente la fiscalía, la policía de Culiacán y el Poder Judicial, para ponerlas al servicio del Cártel. Como candidato, Rocha reconoció ante el periodista Salvador García Soto que no se podía gobernar Sinaloa sin arreglos con los narcos. A confesión de parte...

De forma inaudita, a lo largo de los últimos cinco años los gobiernos de la 4T, primero con López Obrador y hoy con Claudia Sheinbaum, han protegido a Rocha. “Vamos a seguir apoyando al gobernador Rubén Rocha Moya”, dijo hace unos días, casi a gritos, la Presidenta, y cómo no recordar un desplegado de agosto de 2024 firmado por Mario Delgado y los gobernadores morenistas expresando su absoluto respaldo a Rubén Rocha “ante las mentiras y la estigmatización de las que había sido objeto”.

La primera respuesta del gobernador Rubén Rocha Moya frente a la acusación es inaudita, dice que es un ataque contra el Movimiento y contra López Obrador, pero las denuncias arrinconan a la doctora Sheinbaum, a la fiscal Ernestina Godoy y al partido Morena y cuando la Presidenta dice: “Le creemos al gobernador, es compañero del Movimiento desde hace tiempo”, solo se enreda más porque Sinaloa es una entidad federativa tomada por una organización criminal.

Una cuestión me intriga: ¿sacrificará la Presidenta a Rocha Moya o dejará que Trump brome, el lodazal la ensucie y que todo esto la lastime y le reste autoridad? Y algo más: hoy son las redes de protección al narco en Sinaloa, pero esto apenas comienza. ¿Llegará hasta Palenque? ●

—Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate

CONTRACORRIENTE

Rocha (Cártel) y Maru (CIA): la disyuntiva de Sheinbaum

●● MAITE AZUELA

Durante las últimas dos semanas, la palabra "soberanía" ha sido manoseada hasta el cansancio. La muerte de los agentes de la CIA en Chihuahua desató una tormenta retórica desde el oficialismo, rasgándose las vestiduras por la injerencia extranjera y la violación a nuestro territorio. Sin embargo, el estallido de una nueva bomba diplomática y judicial ha dejado ese discurso pendiendo de un hilo: la formal acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De pronto, el mapa político de México nos escupe a la cara una realidad brutal. Hoy, el Estado mexicano padece dos tipos de gobernadores: los que le abren la puerta de par en par a las agencias estadounidenses para que se infiltren e investiguen en su territorio, y los que están infiltrados hasta la médula por el crimen organizado. Ambos perfiles representan una claudicación del Estado, pero nos obligan a plantearnos una pregunta incómoda: ¿cuál de los dos modelos le resulta más útil a Washington y cuál resulta más peligroso para México?

Por un lado, tenemos el escenario de Chihuahua con Maru Campos. Permitir que agentes de inteligencia extranjera operen, investiguen (y mueran) en suelo nacional sin el control del gobierno federal es, a todas luces, una vulneración al pacto federal y a la seguridad nacional. Es la entrega de las llaves de la casa a un país extranjero ante la inoperancia de las fuerzas locales.

Por el otro lado, tenemos el caso de Sinaloa con Rocha Moya. La acusación estadounidense no cae en el vacío; es la confirmación judicial (desde el exterior, porque aquí la fiscalía prefiere mirar al techo) de un secreto a voces. Estamos hablando de un gobernador señalado por cogobernar con la estructura del Cártel de Sinaloa. Escudarse en la "soberanía" para defender a un mandatario estatal acusado de narcotráfico no es patriotismo, es complicidad institucional.

Es urgente poner un alto a la política del encubrimiento dictada desde el atril presidencial. Durante el sexenio anterior, la estrategia fue el espaldarazo incondicional desde las mañaneras: Andrés Manuel López Obrador no se cansaba de visitar Sinaloa, de posar sonriente para la foto junto a Rocha Moya y de defenderlo hasta el cansancio ante cualquier sombra de sospecha.

Ambos gobernadores son profundamente cuestionables. La entrega del territorio, ya sea a una agencia de inteligencia extranjera o a una corporación criminal, es el síntoma de un Estado fallido a nivel regional.

Pero el verdadero drama político de esta dicotomía no recae en Chihuahua ni en Sinaloa, sino en Palacio Nacional. La disyuntiva que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum es un campo minado sin salidas fáciles. ¿Con qué vara medirá estas afrentas a la soberanía?

Si la línea dura del nacionalismo se impone, ¿veremos a la mayoría oficialista en el Congreso promoviendo un juicio político por traición a la patria contra Maru Campos por haber tolerado a la CIA en su estado? Y si ese es el estándar de firmeza, ¿qué hará con Rubén Rocha Moya? ¿Tendrá la Presidenta la fuerza política —y la voluntad— para ordenar la detención y extradición de un gobernador emanado de su propio movimiento, entregándolo a la justicia estadounidense que tanto ha criticado en las últimas semanas?

Ir tras Maru Campos sin entregar a Rocha confirmaría que la ley y la soberanía es solo un arma de persecución contra la oposición.

Sheinbaum está acorralada entre la CIA y el Cártel. Su decisión definirá no solo la relación bilateral para el resto del sexenio, sino el mensaje definitivo que el Estado mexicano le mandará a los criminales y a Washington: si la soberanía es un valor real que se defiende parejo, o si es solo un disfraz de ocasión para encubrir la miseria de nuestros propios gobernantes. ●

—@MaiteAzuela



Juegos de poder

Leo Zuckermann
leo@opinara.com.mx

Una bomba para Morena

• Si no los entrega, se arriesga a que un comando militar estadounidense venga a territorio nacional y se los lleve, tal y como hicieron con Nicolás Maduro en Venezuela. No está fácil la decisión para la Presidenta.

Qué golpe le ha propinado el gobierno estadounidense al mexicano de Morena.

La Cancillería ya recibió el pedido para extraditar al gobernador de Sinaloa, un senador de ese estado, el alcalde de Culiacán y seis funcionarios y exfuncionarios más.

La Fiscalía de Estados Unidos ha presentado un documento que narra algo de lo que nunca se habla en México, es decir, la protección política y policiaca del crimen organizado.

Si el gobierno de **Claudia Shienbaum** entrega a los indiciados al vecino del norte, ya sea extraditándolos o ilegalmente expulsándolos como hizo con 92 criminales de alto perfil, se arriesga a que lo acusen de entreguista.

Si no los entrega, se arriesga a que un comando militar estadounidense venga a territorio nacional y se los lleve, tal y como hicieron con **Nicolás Maduro** en Venezuela.

No está fácil la decisión para la Presidenta.

Ayer, el gobernador **Rubén Rocha** posteo en su cuenta de X: "Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa".

El mensaje está claro, sobre todo para los "liderazgos emblemáticos": yo no voy a caer solo.

El fiscal estadounidense presentó a un Gran Jurado el caso para denunciar formalmente a diez políticos y mandos policiacos mexicanos implicados en una conspiración para traficar drogas (fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina), proteger al **Cártel de Sinaloa** (en particular la facción de **Los Chapitos**) y facilitar sus operaciones.

El Gran Jurado resolvió que sí existen pruebas suficientes para acusar a los indiciados.

El documento de la Fiscalía presenta una narrativa coherente y detallada de la estructura del cártel, los papeles específicos que desempeñaron cada acusado y los mecanismos de corrupción.

La investigación parece sólida con múltiples fuentes.

Hay datos precisos, por ejemplo, de los sobornos. **Damaso Castro Zaavedra**, fiscal general adjunto de Sinaloa, recibía 200 mil pesos al mes; **Marco Antonio Almanza**, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, 300 mil; **Alberto Jorge Contreras**, su sucesor, también 300 mil; **José Antonio Dionisio Hipólito**, exsubdirector de la Policía de Sinaloa, cien mil. **Juan Valenzuela**, excomandante de la Policía de Culiacán, 30 mil pesos. Las autoridades estadounidenses tienen las listas del cártel con los nombres y montos demostrando, así, la red de corrupción.

La acusación narra, también, los avisos de operativos y la protección activa a los miembros del cártel. Se acusa que los funcionarios informaban a los criminales de cateos y redadas, lo cual les permitía destruir o mover la evidencia, así como evacuar las drogas y el personal.

No sólo avisaban, actuaban para proteger al cártel: no arrestaban a miembros armados, liberaban a detenidos, ordenaban no intervenir, permitían el transporte de drogas, dejaban pasar químicos, incluso ayudaban en secuestros, además de detener y entregar a los enemigos del cártel, un informante de la DEA, por ejemplo. En este rubro, la acusación no presenta audios, mensajes o documentos originales completos, lo cual sugiere que la evidencia proviene de testigos protegidos del gobierno estadounidense.

Interesante es la denuncia de intervenir en las elecciones locales de Sinaloa. El cártel habría apoyado a los candidatos de Morena a cambio de recibir protección después.

Los líderes de **Los Chapitos** habrían ordenado a sus miembros y ciudadanos a votar por ciertos candidatos, amenazado o intimidado a opositores, robado boletas y, en general, manipulado todo el proceso electoral. La policía habría recibido órdenes de no intervenir frente a las irregularidades el día de la elección.

Esta acusación tampoco incluye grabaciones, documentos originales y/o evidencia directa verificable. De nuevo, parece venir de testigos protegidos e informantes.

Al haber sido declarados los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, la ley estadounidense otorga jurisdicción extraterritorial a los fiscales de ese país.

El caso parece bien armado en su narrativa, con mucha investigación y el testimonio de testigos protegidos. Se percibe sólida.

La acusación más grave es contra **Rocha** por el cargo que desempeña. No recuerdo que EU haya denunciado a un funcionario en funciones de tan alto rango. Al gobernador de Sinaloa lo acusan de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De resultar culpable podría ser objeto de una pena mínima de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

¿Lo entregará la Presidenta?

De ser así, ¿se irá solo al matadero o involucrará a alguno de los "liderazgos emblemáticos" del movimiento?

X: @leozuckermann



Razones

Jorge Fernández Menéndez

www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez / www.mexicoconfidencial.com

Desaparecer poder y deportar a EU

• La Cancillería dice que no existen pruebas suficientes...

Hace ya muchos meses que el gobierno de Estados Unidos había presentado al de México su lista de narcopolíticos que eran parte de la red de protección y complicidad del crimen organizado. Como hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones, todos los avances que se pueden realizar en el ámbito de la seguridad (detenciones, decomisos), por más importantes que sean, al final, terminan vulnerados por lo que es una decisión política: romper o no esas redes de corrupción.

Hace ya muchos meses cuando se comenzó a plantear con claridad esa demanda por las autoridades estadounidenses (evidentes desde la propia extracción de **Ismael El Mayo Zambada** en una operación encubierta, algo que nunca se ha querido reconocer), un alto funcionario del gobierno, partidario de avanzar contra esas redes, me dijo que el temor que existía era que, si se quitaba un tabique de la pared, ésta se podía caer por completo. Le contesté que, si no lo hacían, sucedería lo que ahora ha comenzado a ocurrir: que Estados Unidos iba a derribar la pared con un bulldozer.

La denuncia contra el gobernador de Sinaloa, **Rubén Rocha**, contra su exsecretario de Gobierno y actual senador, **Enrique Inzunza**, y contra otros altos funcionarios del gobierno de Sinaloa, acusados por el gobierno de Estados Unidos de colaborar y ser parte del Cártel de Sinaloa, dejan al gobierno estatal como un narcoestado y es tan contundente como lo fueron las denuncias que se fueron acumulando durante meses y que hoy se han convertido en realidad, sin que el gobierno federal haya atendido, a lo largo de prácticamente dos años, las mismas.

Esa indecisión, ese temor de avanzar en contra de estos y muchos otros personajes, lo deja ahora en una situación insostenible, porque las acusaciones son tan firmes como el testimonio de muchos de los narcotraficantes que el propio gobierno mexicano envió en ese mismo periodo de tiempo a Estados Unidos y todos, casi sin excepción, han buscado acuerdos de colaboración, convirtiéndose en testigos de las fiscalías estadounidenses.

En octubre de 2024 aquí escribimos que “un eslabón clave en todo esto (la relación del gobierno de Sinaloa con el cártel) es el exsecretario general de Gobierno y actual senador **Enrique Inzunza Cázarez**, a cuyo equipo pertenecía la exfiscal estatal, **Sara Quiñones**, a la que se atribuye el falso entramado del asesinato de **Melesio Cuén**. **Inzunza** tiene relaciones familiares con uno de los principales grupos del cártel de los Chapitos, al que llaman Fuerzas Especiales **Avendaño**, encabezado por **Martín Gaudencio Avendaño Ojeda**.

Según estas investigaciones federales, **Claudia Yuridia Meza Avendaño**, esposa de **Inzunza Cázarez**, y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado, es familiar en primer grado de **Avendaño Ojeada**. Ese grupo criminal tuvo una participación central en el llamado *cullacanazo* para evitar que **Ovidio Guzmán López** fuera detenido en octubre de 2019.

“Y en todo ese entramado, decíamos, otro personaje que aparece constantemente en sus relaciones con grupos de poder local es **Griselda Guadalupe López**, segunda esposa de **El Chapo Guzmán** y madre de **Ovidio** y **Joaquín**, que, además de sus relaciones políticas, opera una importante empresa distribuidora de cemento, **JM Concretos**, que aprovisiona buena parte de ése y otros materiales de construcción para las obras públicas en el estado. Y esos son sólo tres eslabones de la cadena”. Hemos escrito mucho más sobre el tema, sólo cabe recordar que, desde hace un año, **Griselda** también es testigo

protegido en la Unión Americana, como sus hijos **Ovidio** y **Joaquín**, como el propio **Mayo Zambada**, y era ella, **Griselada**, quien manejaba las relaciones políticas con **Rocha**, **Inzunza** y muchos otros.

La primera respuesta del gobierno mexicano —que fue informado de los pedidos de las órdenes de aprehensión con solicitud de extradición desde las seis de la tarde del martes, y que ya sabía, por las palabras del embajador **Ronald Johnson** el jueves pasado en Los Mochis, de la magnitud de la tormenta que se le venía encima— ha sido lamentable: la cancillería dice que no existen pruebas suficientes, apoya a los acusados y, encima, enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por haber dado a conocer las acusaciones. Otra vez la política del avestruz: esconder la cabeza para pensar que no pasa nada. No entienden que la pared, con esta acusación, ya se cayó, lo que viene ahora es asumir los costos de no haber actuado en su momento.

Hace muchos meses también aquí dijimos que el gobierno federal sólo tenía una opción seria en Sinaloa: desaparecer poderes en el estado, porque todo indicaba que la trama de corrupción cruzaba al gobierno de norte a sur y de este a oeste. Hoy, esa opción se convierte en casi única: Sinaloa no es gobernable y no puede ir a unas elecciones en 2027 con todas sus autoridades de gobierno, seguridad y justicia desprestigiadas, sin respaldo moral y enjuiciadas en Estados Unidos. Se debe desaparecer poderes y poner a disposición de las autoridades estadounidenses a todos los acusados, para que sean juzgados con base en las innumerables pruebas que existen contra ellos. Y se debe asumir que son los primeros, pero que, sin duda, no serán los últimos.

Hace meses aquí dijimos que el gobierno federal sólo tenía una opción seria en Sinaloa: desaparecer poderes en el estado.

**JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO**
www.sergiosarmiento.com



La Presidenta tendría que aceptar la extradición a EU de Rocha Moya y los otros nueve políticos de Sinaloa.

El narcogobernador

"Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha de Sinaloa".

Andrés Manuel López Obrador,
10.08.2024

Mientras el gobierno y su partido hegemónico se apresuraban para procesar a Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua, por "traición a la patria", un gran jurado en Estados Unidos ha presentado acusaciones formales por asociación delictuosa para la importación de narcóticos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos.

Apenas el 23 de abril el embajador Ronald Johnson advirtió en Los Mochis, Sinaloa, contra los actos de corrupción en México. Un artículo de Steve Fisher de *Los Angeles Times* señaló que estas declaraciones eran parte de una "campaña" del gobierno de Donald Trump en contra de "funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado". El mismo artículo revelaba que a Rocha Moya se le había cancelado la visa el año pasado.

Además del gobernador, los acusados incluyen a Enrique Inzunza, senador por Morena; Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde sustituto de Culiacán; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Savedra, vicesfiscal de Sinaloa; Alberto

Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la policía de investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía estatal de Sinaloa; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía municipal de Culiacán.

López Obrador defendió siempre a Rocha Moya. En noviembre de 2025, en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el gobernador reveló que en 2021 las encuestas de Morena para candidato al gobierno del estado favorecían al exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres, pero que Ricardo Monreal le informó que AMLO había decidido postularlo por dedazo: "Te voy a dar una primicia –le dijo–: van a suspender el anuncio, porque a mí me lo ha dicho el Presidente, que él tampoco sabe por qué no eres tú el seleccionado". También la presidenta Sheinbaum ha defendido en varias ocasiones a Rocha Moya. "No hay ninguna prueba" en su contra, afirmó, por ejemplo, el 8 de octubre de 2024. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció ayer que recibió las solicitudes de detención con fines de extradición que serán turnadas a la FGR, pero añadió: "En los documentos no se anexan pruebas".

Rocha Moya rechazó ayer "categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra". El senador Inzunza recordó que un día antes "defendí el principio de la soberanía nacio-

nal... con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional", y "hoy, casualmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas".

El acta de las acusaciones, de 34 folios en la versión en español, señala entre otras cosas que "en múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador de Sinaloa, ROCHA MOYA asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cartel, en las que ROCHA MOYA prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cartel". El gobernador permitió a "Los Chapitos" "colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno local y estatal de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público". Estos funcionarios "han protegido a los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas".

• EXTRADICIÓN

La presidenta Sheinbaum tendría que aceptar la extradición de los políticos de Sinaloa para que en Estados Unidos enfrenten un juicio. Tanto ella como AMLO manifestaron su confianza en la justicia estadounidense en el caso de García Luna. Negarse, en cambio, pondría al gobierno mexicano en un curso de colisión con Washington.

La bomba explotó en Sinaloa

Nadie debe llamarse sorprendido por el anuncio de ayer en Nueva York. El anuncio de la apertura de una acusación formal contra 11 funcionarios en activo y exfuncionarios, incluidos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez –su candidato a sucederlo el próximo año–, por su relación con *Los Chapitos*, era algo donde lo único sorprendente es que no fue antes. La acusación de la Fiscalía en la Corte de Brooklyn junto con la DEA colocan, por primera vez en la historia, a un gobierno mexicano –en este caso estatal–, al servicio del narcotráfico.

Le han disparado un tiro al corazón del régimen obradorista que no creía que la relación de los políticos con el crimen organizado era una prioridad de la Administración Trump. En el primer capítulo de la historia que apenas comienza, acusó a la parte más alta de la estructura política y a todo el aparato de seguridad y fiscalías, de haber servido a los intereses de *Los Chapitos*. En el proceso están los dos políticos sinaloenses más importantes, el alcalde de Culiacán, el vicefiscal, los exsecretarios de Administración y Seguridad y varios exjefes policiales.

Las implicaciones son muy graves y delicadas, como también complejas de resolver para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el embajador Ron Johnson le pidió en enero que actuara contra políticos vinculados con el crimen organizado, para que no lo hiciera el Departamento de

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Raymundo Riva Palacio

Opine usted:
rrivapalacio2024@gmail.com

@rivapa_oficial



Justicia, y fue omisa. El jueves pasado, en Los Mochis, junto a Rocha Moya, Johnson anunció que pronto vendrían las acusaciones en Estados Unidos. Llegaron, y recuperando el tiempo perdido pidió su captura con fines de extradición. La cancillería y la Fiscalía General dijeron que no había pruebas, cayendo en el error de que el Tratado de Extradición no establece pruebas en este primer periodo procesal.

Esta acusación es una explosión de alcances inimaginables.

En la escalera del poder, arriba de Rocha Moya se encuentra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no es mencionado en la acusación (que se puede consultar en esta liga:

<https://shorturl.at/WiJQ9>), pero tarde o temprano su nombre emergerá en la opinión pública, porque además de lo que están declarando los jefes del *Cártel de Sinaloa* ante las fiscalías, hay dos investigaciones abiertas contra él en Brooklyn. Para subrayar hacia donde apunta la luz, en el anuncio de ayer estuvo el director de la DEA, Terrance Cole, que estuvo en México cuando era presidente, y quien elaboró la primera lista con 35 políticos, mayoritariamente morenistas, vinculados con el crimen organizado.

El antecedente inmediato a la acusación en Nueva York es agosto de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada, días después de ser capturado por un comando estadounidense en Culiacán, lo imputó de estar coludido con el *Cártel de Sinaloa* y lo acusó de traición por aliarse con *Los Chapitos*. En lugar de tomar las cosas con la seriedad que ameritaba, y abrir una investigación para determinar responsabilidades, López Obrador lo protegió y corrió a Sinaloa para abrazarlo. Obligó a la presidenta electa a ir con él y a los gobernadores de Morena a publicar desplegados en su apoyo. Tenía que protegerlo: era su enlace con el *Cártel de Sinaloa*, que a cambio de dinero y apoyo de sicarios para inhibir elecciones, le dio amplios márgenes de operación a *Los Chapitos*.

No dijo la Fiscalía de dónde salió la información para abrir el proceso, pero no es difícil saberlo. Una fuente de inteligencia estadounidense dijo que la captura de Zambada había sido para que

aportara información sobre la relación del *Cártel de Sinaloa* con el expresidente Nicolás Maduro, con lo cual se determinó su extracción de Venezuela. Pero también para llenar algunas lagunas sobre la relación de los cárteles con la clase política. Ovidio Guzmán, hijo de *El Chapo*, está colaborando con las autoridades estadounidenses, con información sobre esas relaciones y operaciones, que han terminado con detenciones y destrucción de laboratorios de fentanilo.

La acusación formulada es brutal: “Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el cártel... presuntamente protegieron a los líderes del cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas; ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales... que protegieran cargamentos de droga... en tránsito a Estados Unidos, y permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias. A cambio... recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”.

Sheinbaum no puede hacer lo que López Obrador: blindar a Rocha Moya y fingir que no pasa nada. Fue investigada por los servicios de inteligencia estadounidenses durante la campaña presidencial y no encontraron relación alguna con el crimen organizado, pero Rocha Moya se convirtió en una losa con la cual ha tenido que cargar, por compromiso heredado, y para evitar, como argumentan, que la acción en contra de un militante, sería

reconocimiento de fracaso del régimen.

Esta protección es imposible de mantener tras lo que sucedió en Nueva York, salvo que la opción suicida fuera endurecer la posición con Estados Unidos y buscar alianzas con sus enemigos. No es el pensamiento de la presidenta, pero algunos en el ala dura de Morena piensan que es una alternativa. Están equivocados. Se acaba de demostrar. Ni cabezas frías, ni pensar que Trump no dañaría una relación comercial ni alteraría la frontera común, como argumentaban, es una defensa soberana. Aplicar la ley, como se lo pidieron por meses, es la solución.

Ya no lo hizo Sheinbaum, pero puede recortar las pérdidas. El problema es cómo. Una acusación tan grave inhabilita al gobernador, al alcalde y al senador. Deben entender que política y judicialmente están muertos y allanar una salida a la presidenta, al gobierno y al movimiento, renunciando y contratando abogados en Estados Unidos. La presidenta puede salir a decir públicamente, como lo hizo varias veces en privado, que quiere pruebas antes de proceder. Ganará algunos días, pero nada más. Si antes le dijeron que no se las podían dar por temor a filtraciones, ahora menos, que es una investigación en curso.

No es una decisión fácil la que tendrá que tomar en Palacio Nacional, porque la acusación contra Rocha Moya tiene fuertes repercusiones en Tlalpan y Palenque contra López Obrador, a quien se le había ido el miedo por que pensaba que Trump estaba demasiado ocupado con Irán, ignorando las voces de que si se había parado de la mesa, regresaría a terminar de comer.

A ver si es cierto...

●● LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Desde hace casi una década, a partir de su detención, juzgamiento y condena por sus vínculos con el narcotráfico mexicano por parte de la justicia norteamericana, Genaro García Luna se ha convertido en la bestia mitológica favorita del morenismo para encarnar la “corrupción del pasado”. Para López Obrador y Claudia Sheinbaum ese caso se convirtió en el recurso retórico predilecto para marcar distancia con el pasado oscuro y corrupto del “PRIAN” y argumentar sus diferencias, encarnadas en su presunta “superioridad moral”, su “honestidad” y su “vocación transformadora”, frente a los gobiernos que los antecedieron.

La condena que la justicia de Estados Unidos hizo de quien fuera secretario de seguridad pública del gobierno de Calderón (fundada esencialmente en las declaraciones de testigos protegidos o de criminales que se beneficiaron en sus penas por colaborar y convalidar las acusaciones de los fiscales), ha sido repetida hasta el cansancio por los gobernantes morenistas como la prueba fehaciente, el ejemplo por excelencia, la constatación irrefutable de la descomposición del panismo y del priísmo.

Lo anterior constituye la premisa básica desde la cual se debe analizar y evaluar la reacción que tenga el gobierno de Sheinbaum (y el oficialismo entero) frente a la acusación que la fiscalía de Nueva York acaba de hacer ante una corte penal de esa ciudad en contra de diez funcionarios públicos de Sinaloa, entre los que destacan el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador morenista de ese estado, Enrique Inzunza, por diversos delitos de narcotráfico, posesión de armas y por haberse beneficiado políticamente del respaldo del cártel de los “Chapitos”, así como la consecuente solicitud de extradición que el gobierno norteamericano ha presentado ya ante su homólogo mexicano.



¿Ahora resulta que siempre no confían en la misma justicia que condenó a García Luna, el exfuncionario calderonista?*

El dilema no es menor, vistos los antecedentes. En el último año, el gobierno de Sheinbaum ha entregado, sin trámite legal alguno, a casi medio centenar de personas acusadas de narcotráfico a las autoridades de Estados Unidos. Ello ocurrió incluso a pesar de que algunas de esas personas estaban amparadas en contra de la extradición a ese país. Se trató, en efecto, de una actuación absolutamente ilegal (o “extralegal”, pues no está contemplada en las leyes), equivalente a un destierro (figura inexistente en nuestro marco jurídico), que se hizo a requerimiento del país vecino.

Ahora, la petición de extradición de los funcionarios morenistas, hasta donde ha informado la Embajada norteamericana, existe y ya se ha formalizado. ¿Qué hará el gobierno mexicano?

Si existiera un mínimo de congruencia en el oficialismo, debería tramitarse sin reparos ni retrasos la entrega de los acusados a las autoridades estadounidenses y esperar que el mismo aparato de justicia al que se le ha dado todo el crédito en el caso de García Luna, decida si los morenistas acusados de hacerse vinculado y beneficiado del Cártel de Sinaloa son culpables o inocentes.

El dilema no es menor, menos aún cuando López Obrador y Claudia Sheinbaum han avalado, cobijado y legitimado a Rocha Moya y su gobierno de manera reiterada y sistemática.

Vistos los antecedentes (la deportación previa de criminales condenados o sometidos a proceso, y las loas a la justicia norteamericana en el caso García Luna) no acceder ahora a la extradición solicitada implicaría un claro y abierto encubrimiento de encumbrados políticos del morenismo, o qué, ¿ahora resulta que siempre no confían en la misma justicia que condenó al exfuncionario calderonista?

Por otro lado, sin embargo, una eventual condena por narcotráfico al gobernador de Sinaloa por los tribunales neoyorquinos sería demoledora para la credibilidad y hasta para la viabilidad del morenismo, porque convalidaría las cada vez más recurrentes acusaciones de sus nexos con el narcotráfico y la falsedad de la renovación y de la pretendida epopeya histórica que dicen encarnar. ●

—Investigador del IJI-UNAM. @lorenzocordovav

Azucena Uresti

●● **FILA CERO**

Rocha Moya, la punta del iceberg



El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus cercanos —funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza— han sido acusados formalmente por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas, delitos relacionados con armas y secuestro.

La bomba llegó en un comunicado del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien terminó de confirmar los rumores que se venían difundiendo durante días y de respaldar las acusaciones que personajes públicos han hecho en México, ante la defensa a ultranza de las huestes morenistas, incluido el ex presidente Andrés Manuel López Obrador,

padrino político de Rocha.

En más de una ocasión, López Obrador le dio espaldarazos desde Palacio Nacional, validando, por ejemplo, la versión falsa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, ocurrido después de reunirse con Ismael "El Mayo" Zambada; reunión a la que, por cierto, Rocha Moya ha negado haber acudido.

¿Qué dirán ahora los gobernadores y cuadros de la 4T que se rasgaron las vestiduras ante los señalamientos contra su gobernador? ¿Enrique Inzunza tiene algo que decir? Apenas esta semana acusaba airadamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la "injerencia" de agentes extranjeros en territorio mexicano y por colaborar en el desmantelamiento de un laboratorio.

¿El gobierno federal, con sus múltiples

operativos, no vio nada? ¿Lo van a negar y seguir defendiendo lo indefendible? ¿O van a recurrir a la figura del traslado, como lo hicieron con decenas de capos que, sin extradición de por medio, enviaron como ofrenda al presidente de Estados Unidos? ¿Fast track para Rocha Moya o protección y negación?

Por lo pronto, el gobierno adelanta su posición al informar que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, que serán turnadas a la FGR; pero agrega que los documentos enviados "no cuentan con elementos de prueba para determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional", y que será la Fiscalía la que determine si hay o no elementos para proceder contra los señalados por narcotráfico.

México debería sentirse obligado a actuar ante la avalancha estadounidense y pedir explicaciones, como lo intentaron hacer con

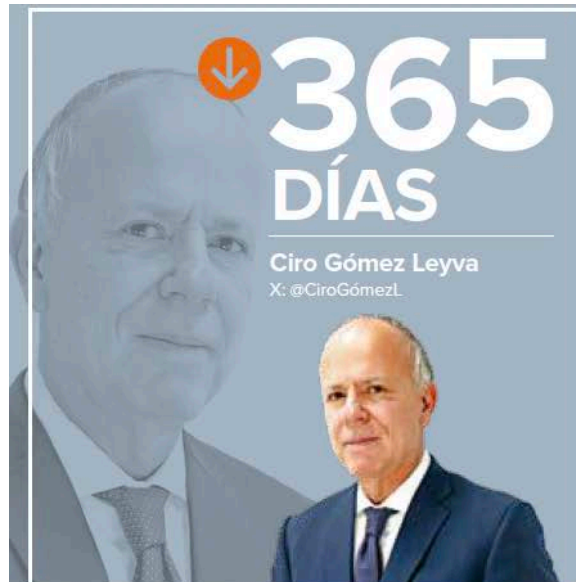
Maru Campos. Hay que saber qué dice Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por el enredo del huachicol fiscal descubierto en Tampico. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, por la violencia incesante en su estado, más recientemente en Taxco, con el secuestro del alcalde y su padre. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por su presunta relación —y la de su exesposo— con el crimen organizado, lo que le valió a él la cancelación de su visa. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por Teuchitlán.

Mientras Estados Unidos le pone el cascabel al gato, los mexicanos seguiremos esperando a que los tiempos políticos, los intereses personales y las relaciones criminales dejen de interponerse entre el ciudadano y la verdad.

Por ahora, por lo menos, que les quede claro que, como decía el clásico: tonto el que cree que el pueblo es tonto. ●

—@azucenau

Seguiremos esperando a que los intereses personales y las relaciones criminales dejen de interponerse entre el ciudadano y la verdad.



Ariadna-Morena, el gobierno la está cantando

Comprendo que los temas de Chihuahua y Sinaloa son muy sonoros, pero uno supondría que el traslado de la secretaria del Bienestar, **Ariadna Montiel**, a la presidencia de Morena habría encendido las alarmas y desatado la cólera de la oposición política. No ha sido así. A dos años de su calamitosa derrota electoral, la oposición sigue luciendo grogui ante un mensaje de Palacio Nacional que parece clarísimo: la consolidada estructura de dispersión de recursos para millones de personas —electores potenciales todos—, simbolizada como nadie por **Ariadna**, se le estaría entregando al partido oficial sin siquiera guardar las apariencias. Estamos hablando de un padrón de 43 millones de mexicanos, según cifras oficiales, que quedaría conectado con los objetivos de la 4T. ¿Los recursos se repartirán ahora con un sentido de equidad de Estado? Parecería que eso piensa la oposición pasmada, silente, que no ve en esto un escándalo. Esa oposición que intentó justificar parte de su fracaso en 2024 con el argumento de que el sistema operó el modelo de dinero para todos a cambio de prácticamente nada, salvo el compromiso de pagarlo con un voto, una vez cada tanto. Que no vengan el próximo año con la pataleta de que se las volvieron a hacer. El gobierno la está cantando. Se las está cantando.

DUDA RAZONABLE

CARLOS
PUIG

@puigcarlos

Y una bomba le
estalla a la Presidenta

Lo que conocimos ayer, la acusación de un gran jurado contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador por el mismo estado, Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; los tres en activo más siete exfuncionarios más es un hecho inédito en la historia de la relación bilateral.

Es en ese sentido sorpresiva, pero en muchos otros no lo es tanto.

La información sobre los nexos de Rocha Moya, sus cercanos y los cárteles,

en particular los de los Guzmán, ha estado ahí hace tiempo, documentada entre otros por medios de comunicación con la independencia y prestigio de *Río Doce* o el *Noroeste*. Vaya, hasta el mismo Rocha Moya dijo que él no tenía problemas para hablar con ellos. Lo dijo con todas sus letras uno de ellos, Zambada, después de que fuera secuestrado por sus rivales y llevado a Estados Unidos.

Hace tiempo que Zambada está en aquel país en proceso y se sabe que una parte de la familia Guzmán anda también allá, hablando con autoridades estadounidenses para definir su futuro y el de sus parientes acusados y presos.

Hoy es evidente, por lo que dice la acusación, que hace meses que la fiscalía neoyorquina viene trabajando el caso. Ahora comenzará la parte legal, la presentación formal de pruebas a México —según dice el Tratado— y luego vendrá la decisión de la fiscalía, es decir, del gobierno.

Ahí está el asunto. Porque lo que siga será una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, de nadie más.

Los acusados se han cobijado en ella. Tanto el gobernador Rocha como el se-

nador Inzunza han argumentado que la acusación es contra “el movimiento”, “Morena”, la “4T”, a “a las y los mexicanos que representamos esa causa”; vaya, hasta a López Obrador metieron en el asunto. Nadie los acusa de tontos.

En momentos en que la relación bilateral estaba, de por sí, en momentos complicados gracias a la renegociación comercial y el asunto de la CIA en Chihuahua.

Es difícil recordar un momento así para un presidente de México en las últimas décadas.

Proteger a Rocha y coacusados a la mala, con lo que eso significaría en la relación bilateral.

Mandarlos a Estados Unidos y lo que eso causará en el morenismo.

Juzgarlos en México (algo que se puede hacer, según la norma) antes de enviarlos causando tanto el enojo de los estadounidenses como de los morenistas.

La Presidenta de la “cabezafría” tiene el peor problema político en muchos años.

Hoy en la mañana comenzaremos a tener pistas de por dónde va su decisión después de la bomba que le ha estallado. ■

EN PRIVADO

JOAQUÍN
LÓPEZ-DÓRIGAlopezdoriga@milenio.com
@lopezdoriga
lopezdoriga.comPolíticos, lo que
quiere Trump

*Nos quieren distraer buscando lo perfecto,
que no existe para eludir la búsqueda de lo
justo, que sí.*

Florestán

Al menos, oficialmente, desde la tarde del martes, la Presidenta de la República tuvo que haber conocido el proceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, pues según dio a conocer ayer la secretaria de Relaciones Exteriores, ese día, a las seis de la tarde, la embajada de Estados Unidos en México le solicitó su detención con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

Y todo fue silencio hasta que ayer a la una de la tarde, en Nueva York se dio a conocer la acusación formal contra todos en una corte federal del sur de Manhattan donde hace unas semanas se inició el proceso contra Ismael *El Mayo* Zambada.

La bomba estalló cuando aún no se dispersaban los efectos de la que explotó el régimen por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua y Morena, toda, pidió la comparecencia de la gobernadora panista Maru Campos, a la que algunos quisieron iniciar un juicio político y que ayer todos salieron a defender a los suyos.

todos salieron a defender a los suyos.

Entre los otros nueve fue indiciado el sinaloense de Morena, Enrique Inzunza, quien fue secretario de gobierno de Sinaloa los tres primeros años de Rocha Moya, doce años presidente del Tribunal Estatal de Justicia y hoy senador de la República, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de la Comisión de Gobernación, Defensa Nacional y Justicia, claves en temas de seguridad.

Rocha Moya salió ayer a negar todo y reafirmar su inocencia, lo mismo que Inzunza que dijo que todo era para afectar al *presidente López Obrador*, fue el único que lo citó. Lo mismo hizo el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, los dos precandidatos para 2027.

El punto será el posicionamiento, hoy, de la Presidenta de la República, en medio de la peor crisis que le estallaron en lo que va de su gobierno.

RETALES

1. REPROCHE. La cancillería hizo ayer un *extrañamiento* a la embajada de Estados Unidos a la que acusó de *violar la confidencialidad de la información*, y reclamó la *falta de pruebas*, lo que es un adelanto de la línea oficial;

2. RECLAMOS. En lo mismo se pronunció la FGR vía Ulises Lara, quien reclamó la falta de confidencialidad de la embajada y dijo que se investigará *si existen pruebas contundentes* además de señalar que, para detener a los acusados, gobernador y senador, se requiere un juicio de procedencia, lo que es un trámite, no una excepción; y

3. 2027. Este caso deja fuera de la sucesión en Sinaloa al senador Inzunza y al alcalde Juan de Dios Gámez. La decisión se toma el 22 de junio. Y abre el camino a la oposición. Ayer, Quirino Ordaz estuvo en palacio acompañando al canciller español Juan Manuel Albares, que visitó a la presidenta Sheinbaum. No sé si hicieron un aparte. —

Nos vemos mañana, pero en privado

Carlos Loret de Mola

●● HISTORIAS DE REPORTERO

Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia



El gobierno de Estados Unidos le está dando una oportunidad histórica a la doctora Claudia Sheinbaum: comenzar a ejercer como presidenta de México.

La doctora Sheinbaum sabe que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está metido con el narco. Lo saben también todos en su gabinete de seguridad. Desde hace tiempo han diagnosticado que sacar a Sinaloa de la guerra pasa por quitar de ahí al gobernador. Pero la presidenta no podía: a Rocha Moya lo ha protegido siempre López Obrador. Así que Sheinbaum optó por ser cómplice de su permanencia.

Ayer, el gobierno de Donald Trump le ofreció una salida: la decisión no la tiene que tomar ella. La presidenta de México puede echarle la culpa a Trump y empezar una profunda limpieza de narcopolíticos de Morena con el caso más emblemático de todos, el del gobernador Rubén Rocha Moya. Y como no hay ninguna garantía de que Trump vaya a conformarse con Sinaloa, a la presidenta le conviene ser ella la que limpie -lo que debió haber hecho con Rocha Moya- para “vacunarse”, para matizar el costo político de los casos que puedan venir.

Encubrir a Rocha Moya, como parece que será por lo visto hasta ahora, puede significar un costo gravísimo para el país y también para ella como presidenta. Le estaría abriendo la puerta a Trump para sus anhelados operativos

antinarco en suelo mexicano. Le estaría abriendo la puerta a Trump para su anhelado rompimiento comercial con México. Porque Trump podría argumentar que México encubre a los capos que Estados Unidos quiere perseguir. Le estarían confirmando sus acusaciones de que México es un narcogobierno, de que en México mandan los narcos y la presidenta -muy dulce, muy inteligente, muy linda, muy bien vestida- está dominada por ellos y les tiene miedo. ¿La presidenta va a arriesgar la soberanía nacional y el TMEC por proteger a Rocha Moya y a López Obrador?

La presidenta pensará que entregar a Rocha Moya es destruir el legado de López Obrador y destruir al movimiento. Ese legado ya está destruido por la acusación misma. Del estigma de narcopresidente ya no se zafanunca. A ella no le toca salvar a López Obrador. A ella le toca salvar al país. Y en esa ruta, salvar a su movimiento, independizarlo de la aniquilada figura de López Obrador y asumir el mando. Porque la acusación no es contra ella ni contra nadie de su gabinete. Así que a la presidenta le toca tomar una decisión difícil, muy difícil. Políticamente muy difícil y personalmente muy difícil. Pero para eso tiene que sentirse presidenta, saberse presidenta y ejercer como presidenta.

SACIAMORBOS

Si a pruebas nos vamos, hay más pruebas de vínculos con el narco de López Obrador... que de Rocha Moya. ●

—historiasreportero@gmail.com

Encubrir a Rocha Moya, como parece que será por lo visto hasta ahora, puede significar un costo gravísimo para el país y también para ella como presidenta.

Luis Cárdenas
●● EN LA MIRA
Narcogobernador


Rubén Rocha Moya es formalmente un narcogobernador, pobre Sinaloa, no merece esto. La acusación que presentó ayer el fiscal Jay Clayton ante la jueza Katherine Polk Failla tiene 34 páginas, fotografías de las listas de sobornos escritas a mano, nombres en clave, montos exactos y una línea cronológica que arranca en 2012, es decir, cuando Rocha fue candidato de Morena, llevaba al menos una década en la mafia del Cártel.

Rubén Rocha Moya enfrentará cargos por conspiración para exportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, técnicamente es un narco-

terrorista para la justicia estadounidense que podría castigarlo con un mínimo de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.

Lo que el expediente narra sobre la elección de 2021 merece leerse despacio. Antes de las votaciones, Enrique Díaz Vega —entonces hombre de confianza de Rocha en el gabinete— entregó a Iván y Alfredo Guzmán una lista con los nombres y domicilios de los adversarios del candidato, para que los Chapitos los intimidaran y los obligaran a retirarse.

Las bases radicales de la 4T tendrán listo el argumento de siempre. Ya lo ensayaron. Lo repetirán con Rocha, pero ya no les alcanzará.

El día de las elecciones, sicarios del cártel robaron urnas y papeletas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. La Policía Estatal de Sinaloa recibió llamadas de emergencia: amenazas en casillas, robo de urnas, hombres armados golpeando votantes. Los agentes tenían instrucciones precisas de no intervenir. Ni en una sola casilla. Así ganó la 4T en Sinaloa.

A cambio, cumplió lo prometido en aquellas reuniones donde él y su secretario general Inzunza Cázarez se sentaron frente a los líderes del cártel: los Chapitos tendrían control total sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Y lo tuvieron. El expediente incluye fotografías de las listas mensuales de sobornos que el jefe de plaza de Culiacán repartía cada mes con una caja de efectivo. En esas listas aparecen los nombres en clave de los funcionarios: el subprocurador Castro Saavedra figura como “Culiacán Regio” —200 mil pesos mensuales—; el jefe de la Policía de Investigación, como

“R1” —300 mil pesos—; el comandante Hipólito, como “Tornado” —100 mil pesos—. Todo anotado con la misma naturalidad con que se registra una lista de gastos de oficina.

En octubre de 2023, el comandante Millán —“Juanito” en las listas— usó patrullas de la Policía Municipal de Culiacán para detener y entregar a sicarios del cártel a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a sus familiares. Entre las víctimas, un menor de 13 años. Todos fueron torturados y asesinados. Eran represalia por haber hablado con los federales de Estados Unidos. Eso también lo hacía la policía de Sinaloa bajo el gobierno de Rocha Moya.

Morena tenía todos los elementos para saberlo, nadie en la estructura morenista hizo preguntas incómodas sobre cómo ganó, por qué sus rivales desistían, de dónde venía el músculo político que lo sostenía.

Las bases radicales de la 4T tendrán listo el argumento de siempre: soberanía vulnerable, injerencia imperial, etc. Ya lo ensayaron con el Mayo, con los informes de la ONU, con cada señalamiento internacional que les resultó incómodo. Lo repetirán con Rocha, pero ya no les alcanzará. ●

Maru Campos para presidenta

Desde el oficialismo se construyen candidaturas de la oposición. La mayoría de las veces sin proponérselo, otras con torpeza estratégica.

Lo cierto es que el fenómeno no es nuevo: quien se coloca sistemáticamente en el centro del debate, quien se señala, atacado y confrontado desde el poder, termina por adquirir una visibilidad que difícilmente lograría por sí mismo.

Y hoy, ese proceso parece estar ocurriendo con María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua.

La historia reciente ofrece un antecedente claro. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien, con sus constantes señalamientos, terminó por catapultar a Xóchitl Gálvez como figura central de la oposición.

Aquella escena en la que Gálvez intentó ingresar a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica no solo generó un choque mediático, sino que detonó una narrativa de confrontación que la posicionó rápidamente en el imaginario público. El efecto

DESDE SAN LÁZARO

Alejo Sánchez Cano

Opine usted:
opinion@elfinanciero.com.mx

fue inmediato: de figura relevante pasó a convertirse en candidata presidencial.

Hoy, la historia parece repetirse, aunque con distintos protagonistas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado en la mira a la gobernadora de Chihuahua, insistiendo en una supuesta violación a la ley de seguridad nacional derivada de la incursión de agentes extranjeros en territorio estatal.

El señalamiento es delicado, sin duda, pero también ha sido reiterado con una intensidad que trasciende lo meramente institucional.

La respuesta de Maru Campos ha sido clara y constante: no tenía conocimiento del operativo y,

por lo tanto, no existe delito que perseguir en su contra.

La gobernadora ha optado por una línea de defensa que combina negación de responsabilidad con un llamado a no politizar el tema. Sin embargo, en política, la narrativa no siempre se define por los hechos, sino por la insistencia con la que estos se colocan en la agenda.

El Congreso no ha sido ajeno a esta dinámica. Desde la mayoría oficialista, legisladores de Morena han escalado el tono al plantear la posibilidad de un juicio político e incluso su desafuero. El argumento: la supuesta desatención a un llamado de la Cámara alta.

Sin embargo, aquí hay un matiz importante que no debe perderse de vista: no se trataba de una comparecencia obligatoria, sino de una invitación. Convertir una invitación en causal de sanción revela, cuando menos, una sobre-reacción con tintes políticos.

Este tipo de embates suelen tener un efecto paradójico y contradictorio. Lejos de debilitar al objetivo, pueden fortalecerlo.

En un escenario donde el Partido Acción Nacional atraviesa por una evidente falta de liderazgos nacionales consolidados, la exposición constante de Maru Campos en el debate público comienza a perfilarla como una

figura con proyección más allá de su estado.

La lógica es sencilla: a mayor ataque, mayor visibilidad; a mayor visibilidad, mayor posicionamiento. Y en un país donde las candidaturas presidenciales se construyen, en buena medida, a partir del reconocimiento público, ese posicionamiento es oro puro.

No se trata de afirmar que Maru Campos sea ya una candidata inevitable, pero sí de reconocer que el oficialismo podría estar contribuyendo, sin quererlo, a su construcción política.

La insistencia en señalarla, en confrontarla y en elevar el conflicto al plano nacional la coloca en un nivel que trasciende la política local.

Para la presidenta Sheinbaum, el cálculo puede ser distinto. Marcar distancia, fijar postura y demostrar firmeza frente a posibles irregularidades forma parte de su responsabilidad institucional.

Sin embargo, en política, la forma importa tanto como el fondo. Y cuando la crítica se vuelve recurrente y personalizada, el efecto puede ser contrario al esperado.

El PAN, por su parte, observa. En un contexto donde la oposición ha tenido dificultades para articular una figura competitiva a nivel nacional, la emergencia de

perfiles con capacidad de confrontar al oficialismo se vuelve estratégica. Si Maru Campos logra capitalizar esta exposición, no sería descabellado pensar en su eventual proyección como candidata presidencial.

Desde San Lázaro, donde se procesan muchas de estas tensiones, el ambiente refleja una polarización creciente. Las mayorías legislativas actúan con disciplina, pero también con una lógica de confrontación que, en ocasiones, termina alimentando a sus adversarios.

La pregunta de fondo es si el oficialismo está midiendo correctamente los efectos de sus acciones. La política no siempre se gana debilitando al otro; a veces, en el intento, se le fortalece. Y eso parece estar ocurriendo en este caso.

Porque al final, más allá de los expedientes, los señalamientos y las disputas legislativas, lo que queda en la percepción pública es una figura que resiste, que responde y que permanece en el centro del debate.

Y en tiempos de definición política, eso puede ser el primer paso hacia una candidatura.

Así, sin proponérselo abiertamente, el oficialismo podría estar incubando a una nueva contendiente. La historia ya mostró que no sería la primera vez.

PENSÁNDOLO BIEN

JORGE ZEPEDA
PATTERSON

La Presidenta considera que al modernizar la administración pública se combate ese cáncer, pero las costumbres de los funcionarios no cambian, como ocurre en el tema del *huachicol* fiscal, que implica a mandos de la Marina

Corrupción y otras deudas de la 4T

Inseguridad pública, falta de crecimiento económico y corrupción son las tres pesadillas de la cuarta transformación. Por lo menos eso es lo que reflejan consistentemente las encuestas que miden la insatisfacción de los ciudadanos. La popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene en las alturas, con cotas que rondan 70 por ciento o lo superan, pero la apreciación sobre su gobierno, en particular esta triada de desafíos, es negativa.

El efecto combinado comienza a impactar a Morena; el porcentaje de simpatizantes ha caído ligeramente por debajo de 40 por ciento después de varios años de mantenerse por encima de esta cifra. En realidad nada que ponga en riesgo el predominio político de este movimiento, toda vez que el entusiasmo que despiertan los partidos de oposición sigue siendo mínimo; solo el PAN llega a dos dígitos y siempre por debajo de 20 por ciento. Sin embargo, se trata de una lenta erosión que preocupa a los dirigentes de la 4T. Se traducirá en triunfos aislados de la oposición, pero potencialmente importantes en las próximas elecciones (entidades y ciudades grandes y una composición de la Cámara de Diputados menos favorable que la actual). Más allá del cálculo político, la insatisfacción de la gente sobre estos temas debe preocupar a Claudia Sheinbaum, empeñada en profundizar y hacer efectiva la transformación prometida.

Los tres casos son distintos y exigirían un texto por separado cada uno. Pero una rápida revisión arroja una perspectiva del duro camino por recorrer. Sin duda, el combate a la inseguridad pública es el que registra mayor avance, y aquí el problema para el gobierno es que la población no termina por apreciar el importante descenso de los índices de criminalidad que las cifras oficiales reportan. Los delitos de alto impacto han descendido en promedio casi a la mitad en un tiempo récord y todo indica que seguirán bajando. Si la estrategia en verdad es correcta, la percepción de la población comenzará a experimentar el impacto, más allá del

manejo amarillista en el que está empeñada la prensa crítica o la incredulidad de la población. No significa, desde luego, que el problema esté resuelto, ni mucho menos. La generación de policías efectivas a todos los niveles, y sobre todo el local, el saneamiento de Ministerios Públicos o el debilitamiento real de los cárteles, entre otras, son desafíos pendientes. Pero todo indica que, al menos, el gobierno se está moviendo por fin en la dirección correcta.

La activación de la economía, en cambio, es un dolor de cabeza. La Presidenta está consciente de que el gobierno de la 4T está obligado a generar empleo formal de manera masiva si quiere sacar a la población de la pobreza. Es eviden-

te que los recursos fiscales no dan para seguir aumentando las pensiones y transferencias directas en la misma proporción que antes. Pero la creación de empleos pasa por lo que haga o deje de hacer el sector privado, que genera alrededor de 85 por ciento del trabajo en México. Y esto no está sucediendo, o no en la escala que el país necesita. La inversión privada sigue constreñida, muy por debajo aún de las expectativas y necesidades.

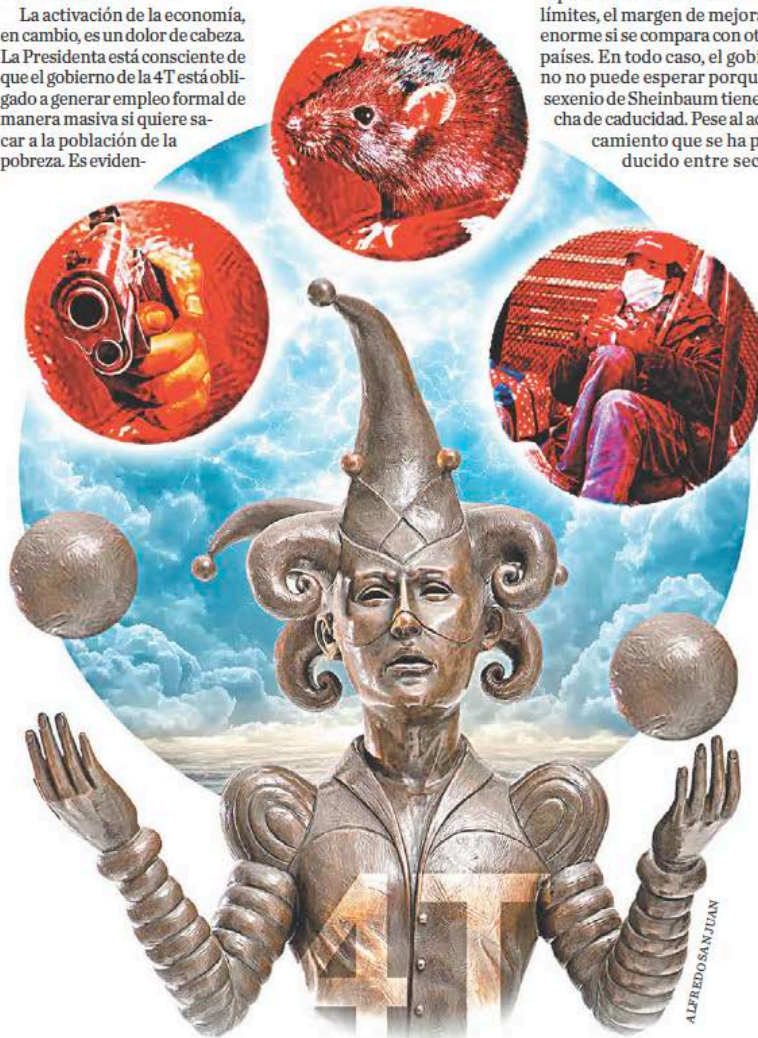
Con crecimientos anuales entre 1 y 2 por ciento el país no es capaz siquiera de dar empleo a la población joven que ingresa al mercado laboral cada año.

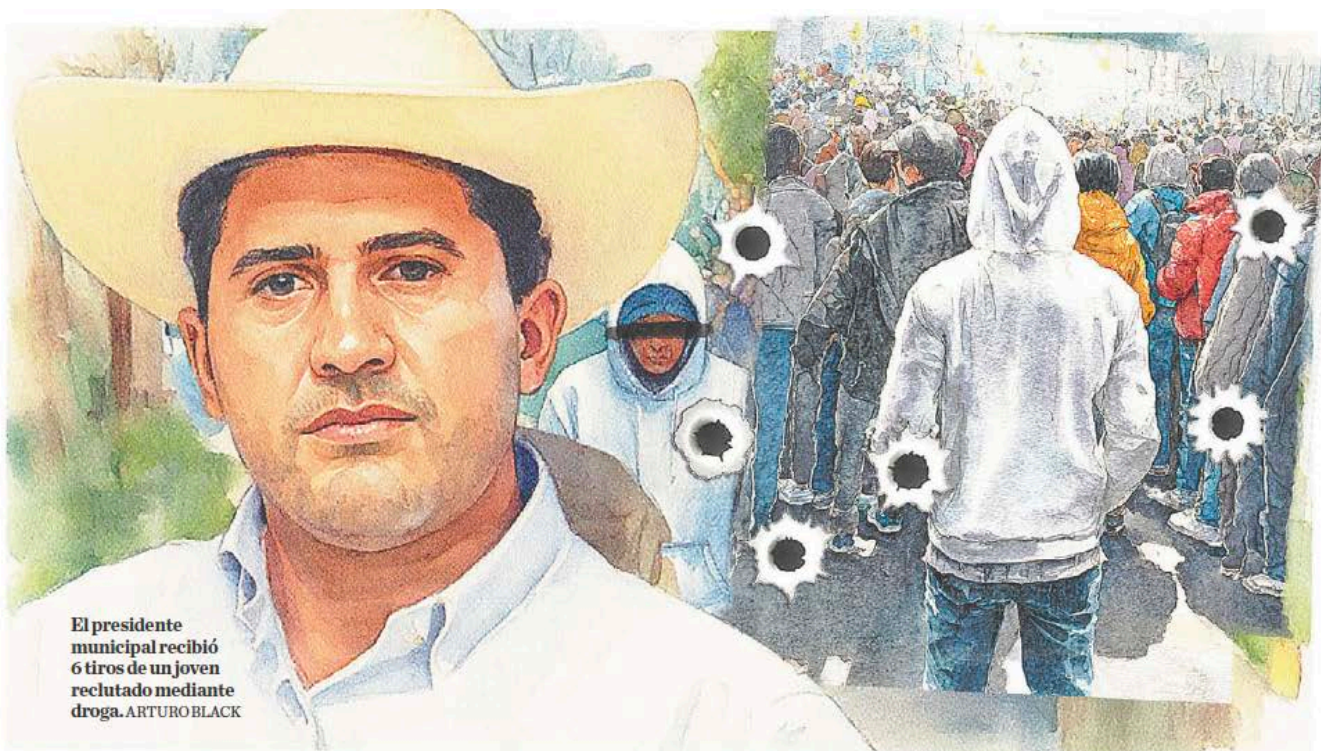
Encontrar las razones por las cuales los empresarios no invierten y qué hacer para que lo hagan, se ha convertido en un desafío para el gobierno. Desde luego hay un contexto externo que no ayuda, la incertidumbre recorre al mundo de los negocios en todo el planeta. Pero dentro de estos límites, el margen de mejora es enorme si se compara con otros países. En todo caso, el gobierno no puede esperar porque el sexenio de Sheinbaum tiene fecha de caducidad. Pese al acercamiento que se ha producido entre sector

público y privado en los últimos meses, sigue habiendo un desencuentro entre ambos a la hora de asumir riesgos, solicitar créditos y poner el dinero a trabajar. Es un diálogo que se encuentra a medio camino y solo la posibilidad de escucharse unos a otros podrá destrabar las resistencias. No hay garantías de que se resuelva, pero, al menos en este punto, el gobierno tiene una voluntad decidida y una estrategia (el Plan México entre otros).

El tema de la corrupción, en cambio, es el más deficitario. Atenderla no ha sido una prioridad de la 4T. En el sexenio pasado no se combatió, quizá por la noción romántica de que un movimiento en favor de los pobres suponía cuadros investidos de una moralidad innata. Obviamente no fue así. Ni todos compartían las banderas del obradorismo (porque el reclutamiento proviene de todos lados), ni muchos de quienes lo hacían lo asumieron como una conducta a seguir. Por desgracia, ser de la izquierda no es garantía de probidad una vez que se experimentan las mieles del poder o los privilegios. Sheinbaum tiene el propósito de hacer algo más significativo al respecto, pero el avance es mínimo. Por un lado, porque concibe, con razón, que más que un esquema punitivo lo eficaz reside en una modernización completa de la administración pública que disminuya drásticamente la oportunidad de delinquir: trámites digitales, directos y sin intermediarios, licitaciones transparentes, eliminación de gestiones innecesarias, cuadros más profesionales, entre otras.

Sin embargo, esta modernización de la burocracia no modifica de inmediato los arraigados usos y costumbres. La percepción de la opinión pública es que en la parte punitiva, el castigo a los delitos de cuello blanco, es mínima. Existe la impresión de que la Presidenta ha actuado con excesiva cautela respecto a las estructuras de poder heredadas del sexenio anterior. La investigación de irregularidades como el *huachicol*, o en lo tocante a ineficiencias de los altos mandos del Ejército y en los gobiernos de Morena, sea a nivel federal o estatal, parecen no trascender más allá de las segundas parrillas. Nunca a las cabezas. Es irónico que la última administración que lo hizo, la de Enrique Peña Nieto, a la que no se le tiene precisamente por una administración honesta, metió a la cárcel a tres de sus gobernadores. La 4T está lejos de poder decir algo similar. ■





El presidente municipal recibió 6 tiros de un joven reclutado mediante droga. ARTURO BLACK

Reportaje

CÉSAR CABRERA
MORELIA

M+

La noche del 1 de noviembre de 2025, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, caminaba por el Centro Histórico tras haber inaugurado el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos. Se abrió paso entre la multitud que asistió al acto; sin embargo, a las 20 horas un joven le disparó seis veces.

A seis meses del crimen, las investigaciones han revelado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ordenó el ataque con la complicidad del círculo cercano del alcalde. Hasta el momento, 22 personas han sido detenidas, entre ellas sus siete escoltas y un empleado de la alcaldía que operaba como infiltrado para la organización criminal.

Las indagatorias de la Fiscalía de Michoacán evidencian que los altos mandos del CJNG pusieron precio a la vida de Carlos Manzo: 2 millones de pesos para quien “se aventara el tiro” de asesinar al líder del Movimiento del Sombrero.

El desmantelamiento de la red delincuencia encargada del ataque comenzó el 18 de noviembre con la detención de uno de los líderes del cártel: Jorge Armando N, *El Licenciado*, identificado como coautor intelectual del homicidio.

Este golpe fue seguido por la captura de siete de los ocho escoltas del alcalde, señalados por su inacción durante el atentado y por haber matado, cuando ya estaba sometido, al asesino de Carlos Manzo.

A medio año del asesinato, hay 22 detenidos, entre ellos siete escoltas y un presunto autor intelectual, además de dos sospechosos ejecutados

Crimen en Uruapan

El narcocomplot que mató a Manzo y desató la rebelión “del sombrero”

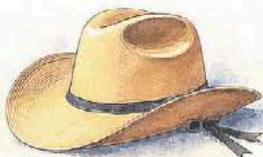
La fiscalía estatal descubrió que *El Licenciado* no sólo era el cerebro detrás del crimen, sino el encargado de la plaza que coordinaba a los ejecutores de Manzo mediante un chat operativo.

La cacería de sospechosos se extendió hasta enero pasado sumando a personajes clave, como Jaciel Antonio N, *El Pelón* —encargado de reclutar a menores de edad— y líderes delictivos como *El Kaoz*.

El avance de las pesquisas reveló una traición interna con la detención de Samuel N, director de Relaciones Públicas y Protocolo del ayuntamiento, quien operaba para el CJNG junto a un distribuidor de droga apodado *El Viejito*.

No todos llegaron a manos de la justicia. Dos implicados fueron ejecutados antes de ser arrestados: Fernando Josué, de 16 años, y Ramiro, quien dejó una carta en la que detalló cómo se orquestó la muerte del alcalde desde sus propias filas.

Siguiendo las instrucciones de la carta, la viuda de Ramiro rindió



El Cártel Jalisco ofreció 2 mdp a quien “se aventara el tiro” del homicidio

su declaración en Morelia, donde entregó los teléfonos celulares y el escrito póstumo, piezas que se convirtieron en pruebas clave para la fiscalía.

Por otro lado, la madre de Fernando Josué relató que vio a su hijo por última vez el 27 de octubre de 2025. En esa ocasión, el joven llegó acompañado por *El Pelón*, quien intentó extorsionar a la

mujer exigiendo 5 mil pesos bajo el pretexto de haber “salvado” al menor de un castigo por traficar droga de un bando contrario.

Tras negarse al pago, la madre logró contactar a su hijo días después del ataque vía Facebook; en esos mensajes, Fernando Josué reveló que su amigo, Víctor Manuel, era el asesino del alcalde y que su cuerpo yacía abandonado en la morgue.

El móvil principal del asesinato de Manzo fue una represalia directa del CJNG debido a las acciones de combate al narcotráfico que el alcalde estaba encabezando en Uruapan.

El punto de inflexión fue la captura de *El Rhino*, jefe de plaza del cártel. El arresto, llevado a cabo personalmente por el alcalde, desafió directamente la estructura de mando de *El Mencho*.

El grupo criminal consideraba que el alcalde “estaba haciendo un cagadero”, es decir, su administración estaba interfiriendo con la

operatividad, el control territorial o los negocios de la organización.

“Se la rifaron muchachos, mis respetos (...) El patrón les manda decir que gracias”, fue parte de lo último que escribió *El Licenciado* en el chat.

La tarde del 18 de noviembre, tras un seguimiento mediante cámaras de videovigilancia, agentes de la Policía de Investigación interceptaron a Jorge Armando en calles de Morelia.

Aunque inicialmente se resistió a identificarse, la persistencia de los oficiales lo obligó a claudicar, respondiendo con cinismo: “Yo soy *El Licenciado*... Tengo mil varos. Si quieren más, llévenme a la casa y les doy más”.

Según el Ministerio Público, el último intento de soborno del detenido ascendió a 10 mil dólares, oferta que los oficiales rechazaron. Su captura se formalizó a las 16:10 horas bajo cargos de cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Durante la revisión, los agentes le aseguraron un arma, mil 220 pesos en efectivo y droga.

El viernes 21 de noviembre, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en Uruapan, fueron detenidos los siete escoltas de Carlos Manzo, quienes fueron vinculados a un proceso junto con *El Licenciado*.

Actualmente, los policías permanecen reclusos en el Centro Penitenciario David Franco Rodríguez, mientras Jorge Armando fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. ■

Lea el reportaje completo en:
www.milenio.com

